

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDO.- La defensa letrada de la acusación particular, interesó como prueba anticipada la documental, siendo admitidos los documentos que constan en autos, por las razones fundamentadas en el acto de la vista, como es de ver en la videograbación levantada bajo la fe pública judicial.

TERCERO.- Tras la práctica de la prueba, y dando por reproducida la documental, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales, elevando a definitivas las siguientes: modificó el párrafo tercero de la conclusión PRIMERA, rectificando la fecha, debiendo consignarse la de 19 de mayo de 2012; en el penúltimo párrafo se suprime: *“Para su sanidad XXXXXXXXXXXXXXXX requirió de tratamiento quirúrgico y rehabilitador, siendo necesarios para su curación, 195 días improductivos para sus ocupaciones habituales, cuatro de ellos de hospitalización, además padece secuelas valoradas en 2 puntos”*; en el apartado SEGUNDO A), se añade: *“...”*; subsidiariamente, los hechos serían constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave del artículo 142.2 del Cpn”; también del apartado SEGUNDO se suprime el subapartado B); el apartado QUINTO se modifica en el sentido de añadir a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena *“o, alternativamente, de ser calificados los hechos como imprudencia menos grave, la pena de 5 meses de multa, a razón de 6 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 CP, y al pago de las costas procesales”*, suprimiéndose igualmente la pena por el delito de lesiones imprudentes; Respecto a la Responsabilidad Civil, se mantiene la cuantía, suprimiéndose la consignada respecto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al haber retirado el Ministerio Fiscal la acusación respecto de las lesiones sufridas por el mismo, por haber sido indemnizado a su plena satisfacción.

La asistencia letrada de la acusación particular modificó sus conclusiones provisionales, concretamente las siguientes: en el apartado PRIMERO, modificó en el tercer párrafo: *“A las 21.30 horas...”*, en el mismo párrafo, después de las tijeras *se precipitó alcanzando a dos asistentes...el chopo y una parte de la tijera que pretendía servir de sujeción al mismo impactaron en la cabeza...ambos viven en la actualidad y con*

quienes convivía...”; modificó el párrafo quinto del apartado PRIMERO, modificando la cuantía a la que ascendió la lápida en 5.080 €...”; se modificó igualmente el último párrafo del apartado PRIMERO, “...habiendo indemnizado dicha aseguradora total y absolutamente a su satisfacción a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en fecha 29-1-16, y habiendo consignado en 20-01-16 la cantidad de 121.308,15 € para pago a los padres del fallecido XXXXXXXXXXXXXXXX como indemnización por fallecimiento del mismo y de los gastos funerarios, a quienes con fecha 22-03-16 se les entregó pago a cuenta de una mayor suma que reclaman”; modificó la CONCLUSION QUINTA, añadiendo un nuevo párrafo: “Y a ambos acusados y a tenor de lo establecido en el artículo 56.3º del CP la inhabilitación especial para empleo o cargo público por idéntico plazo al de su condena”. Por último, se modificó la conclusión SEXTA relativa a la cuantía de Responsabilidad Civil que se reclama concretándose en: “305.400 € por la defunción y en 9.160, 52 euros por gastos de enterramiento, servicios funerarios y lápida...a tenor del contenido del artículo 20 de la LCS...y a un tipo igual al del interés legal del dinero desde dicho momento y hasta los dos años y a partir de los dos años y hasta su completo pago a un interés no inferior al 20%, teniendo en cuenta la cantidad consignada por dicha aseguradora en su momento a los efectos de cálculo”.

La defensa de los acusados, de la responsable civil directa, aseguradora OCASO y responsable civil subsidiario, Ayuntamiento de Planes, elevaron sus conclusiones provisionales a definitivas, e interesaron la libre absolución de sus defendidos, y una vez presentados los informes de las partes y concedida la última palabra a los acusados, el juicio quedó visto para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

Ha resultado probado y así se declara expresamente, que a la fecha de los hechos, 19 de mayo de 2012, ostentaba el cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Planes, el acusado D. F.J.S.M., sin antecedentes penales, y el cargo de Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Planes, D. V.M.C.P., sin antecedentes penales.

El día 19 de mayo de 2012, se celebró en el Municipio de Planes (Alicante) la festividad

de *“La Plantà del Xop”*, festividad ancestral que data de varios siglos de antigüedad, que habitualmente se festeja el sábado anterior al domingo de Corpus, en la que los mozos del pueblo, los quintos que cumplen 18 años, después de realizar durante el año actividades para recaudar fondos, el día de la festividad organizan una comida en la que invitan a todos los asistentes, a los que también se les ofrecen refrescos y una bebida tradicional del pueblo llamada *“mentira”*; por la tarde, los quintos, familiares, invitados o cualquier persona que decide acudir al evento, se desplazan hasta una chopera del municipio, y eligen (bien ese día o seleccionado días antes) un chopo, alto y recto, lo talan y lo trasladan a hombros hasta la plaza del pueblo, *“Plaça del Baix”*. Durante ese día la Unión Musical de Planes junto a un grupo de Dolçainers de Planes, amenizan la fiesta cantando canciones típicas, ataviados con el traje tradicional del pueblo; cuando el chopo llega a la plaza se realiza todo un ritual previo a la plantà, por la que se talan las ramas sobrantes, se equilibra la copa y se arranca la corteza del chopo para que quede a la vista la madera y quede pegajoso, con la finalidad de que no resbale cuando se coloquen los tres pares de tijeras. Con las cortezas arrancadas del chopo, se van haciendo danzas, se dan golpes en el suelo y se hace ruido como ritual para ahuyentar los malos espíritus.

Las tijeras para el izado del chopo (tres pares de tijeras), facilitadas por el Ayuntamiento, están formadas por dos troncos o vigas de madera maciza de entre tres o tres metros y medio de largo, unidos en cruz por una cuerda, que se utilizan como soporte para ir haciendo cuño o palanca con el árbol, proyectándolo sobre una arqueta que hay en el centro de la plaza, para que quede apuntalado, con ayuda también de una plancha de aluminio facilitada por el Ayuntamiento, para poder izarlo y que quede recto.

Para el izado final del chopo, se atan varias cuerdas a lo largo del tronco, en disposición radial, cuyas puntas cogen varios asistentes, con la finalidad de que cuando el pie del chopo esté dentro del hueco, y tras conseguir que con la ayuda de las tijeras esté prácticamente elevado en unos 90º se tire de ellas, para ayudar a dejarlo recto. Durante las labores de izado, las personas mayores del pueblo, los veteranos de la fiesta, hacen un sonido característico llamado *“OISSA”*, para marcar el ritmo al que debe ir siendo izado el chopo.

Sobre las 21:30 horas del día 19 de mayo de 2012, en la plaza principal del municipio de Planes, mientras se trataba de izar el chopo, con ayuda de las tijeras, por razones que no se han podido determinar (por resbalar alguna cuña de tijera que careciese de calzado seguro, por falta de fuerza humana suficiente para soportar el peso en las tareas de izado, por resbalar el calzado de los participantes en el izado, por cansancio de los participantes...), el chopo cayó sobre los asistentes, alcanzando una de las grandes vigas de madera que lo sujetaban (uno de los dos troncos que forman parte de las tijeras) a XXXXXXXXXXXXXXXX, quien se encontraba entre los mozos que trataban de sujetarla, causándole la muerte, cayendo también una parte de una de las tijeras a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, causándole fractura cerrada del tercio medio de la *tibia izquierda*.

Para su sanidad, XXXXXXXXXXXXXXXX requirió de tratamiento quirúrgico y rehabilitador, siendo necesarios para su curación, 195 días improductivos para sus ocupaciones habituales, cuatro de ellos de hospitalización, padeciendo también secuelas valoradas en 2 puntos. El perjudicado no reclama por haber sido indemnizado a su entera satisfacción por OCASO, y el Ministerio Fiscal no acusa por las lesiones sufridas por el mismo.

El Ayuntamiento, tenía concertada póliza de responsabilidad civil con la compañía OCASO SEGUROS, quien además de satisfacer las responsabilidades pecuniarias por las lesiones sufridas por XXXXXXXXXXXXXXXX, a su entera satisfacción, en fecha 20 de enero de 2016 consignó judicialmente la cantidad de 121.308, 15 €, en concepto de pago de gastos funerarios y de indemnización por el fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX, que se entregaron a los padres del fallecido en fecha 22 de marzo de 2016.

El acusado V.M.C.P., como concejal de fiestas de la localidad de Planes, incumplió las obligaciones propias de su cargo (artículo 78 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local), desentendiéndose de forma injustificada de las necesidades y organización de la festividad de la Plantà del Xop que se celebró el 19 de mayo de 2012 (contratación del Grupo de Dolçainers, coordinación de la actuación de la Unión Musical de Planes, ordenes de revisión y puesta a punto para la entrega de tijeras y cuerdas que se encontraban en almacén municipal, presupuesto y propuesta

de aprobación para iluminación de la plaza; disposición de las vallas para el cierre del tráfico rodado en el pueblo, etc.); labores propias del cargo político para el que fue nombrado, y cuya atribución ostentaba en exclusiva.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Previo a entrar a resolver sobre todas las cuestiones suscitadas en este proceso, se hace necesario, en primer término, siquiera liminarmente, dar respuesta al escrito de conclusiones definitivas presentado por la defensa letrada de la acusación particular, de D. XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en lo relativo a la solicitud expresa de condena a los acusados por las lesiones sufridas por XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.

Pues bien, tal solicitud de condena no puede tener favorable acogida, dado que debemos recordar a dicha parte, que en el procedimiento penal español la personación viene a definirse como aquel acto procesal en virtud del cual quien tiene un interés directo o indirecto en el proceso penal accede al mismo, en calidad de parte, a fin de ejercitar sus derechos, lo que conlleva que quien se persone debe evidenciar la existencia de un interés legítimo que le faculte y legitime para hacerlo y, además, debe expresar su condición de parte y la razón de su personación, a fin de ejercitar las acciones penales y civiles o sólo una de éstas, con la finalidad de ejercer sus derechos procesales, al considerarse víctima del delito o perjudicado por los hechos que se enjuician, frente a quienes resulten responsables en el ámbito penal y civil. Y entre las partes acusadoras, entendidas como aquéllas que se sitúan, dentro del proceso penal, en la postura inquisitiva en orden a impulsar la investigación o instrucción en fase preliminar y, posteriormente mantener, en su caso, la acusación frente a la persona o personas que a tenor de dichas partes aparezcan como responsables.

Así, por una parte, el Ministerio Fiscal, en virtud el estatuto que lo regula y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (a salvo de los delitos privados), debe personarse necesariamente en el procedimiento, ya que su labor, de conformidad con su estatuto orgánico, consiste en impulsar el procedimiento penal y ejercitar la acción penal en los delitos públicos y en los semipúblicos, y en este último caso, cumplido el requisito de la previa denuncia del ofendido, el Ministerio Fiscal siempre deberá ejercitar la acción

penal. En caso que el Ministerio Fiscal no aprecie la existencia de indicios racionales de criminalidad que le sean imputables a aquél frente al que se inicie el proceso, y su posición se alce en contra de una acusación particular que mantiene una postura acusatoria frente a otro, si el Ministerio Fiscal no encuentra justificación alguna para acusar, no tiene porqué mantener la tesis acusatoria, que corresponderá ejercitar a quien tenga la consideración de acusación particular. Y si no ejercita acusación el Ministerio Fiscal respecto a un posible ofendido por el delito, podrá ejercitarse por la acusación particular, siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 110 de la Lecr. que dispone: *“Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho, podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniera, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones”*. El párrafo segundo de dicho precepto ofrece la posibilidad al perjudicado, una vez se le tome declaración y se le instruya de su derecho que le asiste, para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible, y aún cuando no se personase mostrándose parte en la causa, no por ello se entiende que renuncia al derecho de restitución, reparación o indemnización, que a su favor pueda acordarse en sentencia firme, salvo que la renuncia a ese derecho lo haga de forma expresa y terminante. En este caso, es decir, cuando los perjudicados no se personan en forma en el proceso penal, pero tampoco renuncian a la restitución, reparación o indemnización que pudiera acordarse a su favor en la sentencia que ponga fin al proceso, sus derechos resarcitorios pueden ser ejercitados por el Ministerio Fiscal (109 y 109 bis Lecr).

Por tanto, el perjudicado puede perfectamente personarse en el procedimiento, ejercitando las acciones que le correspondan en el proceso constituyéndose, como acusador privado, cuya personación exige, necesariamente, la intervención de Abogado y Procurador y respetando siempre los límites temporales que fija la Lecr, para poder personarse en el proceso, que en el procedimiento abreviado (780 Lecr) el momento preclusivo a partir del cual no cabe la personación del perjudicado como acusador particular, es precisamente el trámite del escrito de acusación, y conforme a la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal Supremo, hasta la celebración del Juicio Oral, siempre que se adhiera a lo solicitado por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

Aplicando la legislación procesal vigente en esta materia, al caso de autos, el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación incluía el delito de lesiones sufridas por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, interesando las cuantías indemnizatorias que entendía le correspondían al mismo, quien por su parte, tras personarse en la causa como perjudicado, presentó escrito de acusación particular en fecha 18 de marzo de 2015, (folio 247), compareciendo en el Juzgado en fecha 29 de enero de 2016, renunciando expresamente a cuantas acciones e indemnizaciones pudieran corresponderle en el presente procedimiento, por haber sido debidamente indemnizado por la Compañía de Seguros Ocaso; formalizada la renuncia, el Ministerio Fiscal, en fase procesal de Conclusiones Definitivas solicito se suprimiera el párrafo 3º del apartado PRIMERO, de su escrito de conclusiones provisionales, interesando igualmente, respecto a la Responsabilidad Civil, se suprima la consignada respecto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al haber retirado el Ministerio Fiscal la acusación respecto de las lesiones sufridas por el mismo, por haber sido indemnizado a su plena satisfacción. Por tanto, el Ministerio Fiscal, en el plenario se alzó de la acusación hasta entonces formulada frente a los acusados por las lesiones sufridas por el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, razones por las que es procesalmente inadmisibles, que el letrado de la acusación particular del Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX y Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX, pueda modificar sus conclusiones provisionales para interesar, por no ser perjudicado por las lesiones sufridas por el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, la condena de los acusados por las lesiones sufridas por el primero, quien renunció a su derecho, tal y como afirmó nuevamente en el plenario, en el que depuso como testigo bajo juramento. Por tanto, la asistencia letrada de los perjudicados vino a ejercitar una “especie” de “acción popular”(artículo 125 CE), cuya regulación se encuentra en los artículos 101 y 270 de la Lecr y 19.1 de la LOPJ, improvisada en fase de elevación de conclusiones a definitivas, extemporánea al no cumplirse los requisitos legales, y habiendo renunciado el perjudicado y el Ministerio Público a seguir la acusación por tales hechos, que ya no podrán ser objeto de enjuiciamiento respecto de ninguno de los acusados y responsables civiles personados en el proceso, al quedar el delito condicionado a las condiciones de perseguibilidad del perjudicado y en el momento que éste carece ya de interés en su continuación, se le entiende destituido de la acción y decae la finalidad punitiva, desistiendo igualmente el Ministerio Fiscal, careciendo por tanto de interés punitivo de los hechos respecto de XXXXXXXXXXXXXXXX, y el interés del estado en

castigarle, razones todas ellas por las que procede absolver a los acusados del delito de lesiones del que venían siendo acusados respecto del perjudicado XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados, son resultado de un examen racional y detenido de la totalidad de la prueba practicada en el juicio oral tal y como exige el art. 741 LECrim, realizada con todas las garantías constitucionales y legales exigibles, tal y como se va a abordar a continuación.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, atribuyen a los acusados el delito de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 CP, por el fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX; igualmente el Ministerio Fiscal solicitó, de forma subsidiaria, la condena de los acusados por un delito de homicidio por imprudencia menos grave art.142.2 Cpn, al entender que es más beneficioso para los acusados.

No ha sido objeto de discusión el fallecimiento inmediato de XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tras el accidente sucedido el día de los hechos; en ese sentido, en el informe pericial de autopsia (folios 31 a 34 TOMO I) de fecha 23 de mayo de 2012, en su apartado 5, se recogen las siguientes conclusiones medico legales: *“Que la muerte de D. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX puede ser considerada de origen violento; la causa inmediata de la misma ha sido por destrucción de centros encefálicos y su causa fundamental el traumatismo cráneo-encefálico; se considera de etiología médico-legal accidental; la data de la muerte se establece el día 19 de mayo de 2012 a las 21:30 horas con las normales variaciones”.*

Lo que se ha planteado en el Plenario, a efectos del dictado de una sentencia condenatoria, es si la muerte accidental se produjo por falta de adopción de medidas de seguridad, en su caso, responsable/s de la adopción de las mismas y si los acusados deben responder penalmente del accidente con resultado de muerte producido.

Previo a entrar a analizar cada una de las cuestiones suscitadas, conviene reproducir, en lo sustancial, la prueba practicada en el plenario.

Así, el acusado **F.J.S.M.**, explicó que en 2012 era Alcalde de Planes; la fiesta tiene carácter ancestral, donde los quintos celebran su fiesta, y el Xop se planta con unas cuerdas y unas tijeras; los quintos cortan el tronco y lo llevan a la plaza del pueblo; se

cuelgan banderitas de adorno y se pela; en la plaza hay un hueco disponible; había un hoyo de obra de hace muchos años, se atan unas cuerdas en la copa, hay una expresión de las personas mayores del pueblo, llamada "*oissa*", por la que se coordinan los movimientos...las tijeras van corriendo en posición...se utilizan después piedras para fijar el chopo en el hoyo; nunca ha habido normativa al tratarse de una fiesta ancestral; sabía que el 19.5.2012 se iba a celebrar ese evento; el Ayuntamiento organiza que haya un grupo de danzas; se cortan las calles, coordina el evento, orquesta, tarima, la custodia de tijeras y las cuerdas; los quintos eligen el chopo que quieren talar y plantar; los quintos suelen ir con sus padres, los mayores dicen "*oissa*" para dar las instrucciones, la operación de izado la realizan los festeros; sobre las medidas de seguridad que existen son las 3 tijeras y las cuerdas; no se avisa a una ambulancia, o a protección civil; no disponen de policía local; tampoco avisan a la Guardia Civil para que esté durante el festejo, los que acuden son de paisano; no estuvo el día de los hechos; sabía que iba a tener lugar el evento; V.M.C.P. era Concejal de Fiestas, el encargado de organizar todo; no existe un plan de prevención de riesgos; la fiesta se viene celebrando desde el año mil ochocientos y algo, y se ha hecho siempre, todos los años; nunca ha pasado nada; se custodiaban las tijeras y cuerdas en los almacenes del Ayuntamiento; quien elige el chopo que hay que cortar son los quintos o los padres; no se les indica por el Ayuntamiento el perímetro o altura que debe tener el chopo; esa fiesta simboliza la fertilidad de la tierra, cuanto mas grande más hombre eres; lo eligen los quintos, y siempre son de grandes dimensiones; vio el chopo de 2012, le contaron que ese año sacaron el chopo del barranco de las letillas, lejos del pueblo, y se suele llevar en tractor hasta la entrada del pueblo; ese día no estaba en el pueblo, le mencionaron que cuando ocurrió el accidente era de día; la hora de la plantà dependía del sitio desde donde se sacaba, si era más o menos accesible; se hizo un tríptico (folios 119 y 120 TOMO I), cuyo texto está sacado de una tesis doctoral que explicaba con fervor el contenido de la fiesta, si bien en la práctica no es exactamente lo mismo; se pidió permiso a su autor para autorizar la publicación del tríptico; en la comarca hay una bebida típica para refrescarse llamada "*mentira*", el día de la fiesta se organiza y paga por los quintos una comida; ellos también suministran la bebida; cada uno bebe voluntariamente lo que quiere; sobre las medidas de seguridad hizo nuevamente alusión a las tijeras, cuerdas y una plancha de hierro, relatando que las tijeras soportan el peso del chopo y ayudan a levantarlo; las cuerdas ayudan a elevar; sabe que en otras

poblaciones tienen unas cuerdas elevadas para evitar el desplome del árbol, pero en Planes siempre lo han hecho así, nunca hubo ningún accidente antes de estos hechos; en alguna ocasión se ha decidido tirarlo al suelo y levantarlo de nuevo, por peso, por cansancio; no sabe si ha habido accidentes en otras poblaciones; la fiesta es plantarlo como se ha hecho toda la vida; no se ha podido prever que sucediera, si hubiera tanta sensación de peligro la gente no lo haría; no se ha vuelto a celebrar la fiesta por respeto a la familia, aunque hay gente que la quiere volver a celebrar; se podría hacer un protocolo de actuación, contratar una ambulancia, realizar algún perímetro de seguridad; la mujer del declarante estaba allí, muy cerca con su hija de cuatro años y no vio el peligro; el Pleno del Ayuntamiento solicitó nombrar la fiesta como bien de orden cultural; se cortan las calles; ese año se adoptaron las mismas medidas de siempre, todos los festejos del Ayuntamiento se realizan con el beneplácito de todo el pueblo; el festejo es de ellos; el Ayuntamiento no lo supervisa, porque es una fiesta del pueblo; se organizan danzas y chiribiteros y una orquesta; cuando el Ayuntamiento no tiene recursos piden ayuda a la Diputación; el Ayuntamiento no exige ninguna declaración responsable; se trata de un pueblo que en 2012 contaba con un censo de unos 800 habitantes; la Alcaldía y el Pleno son los órganos de gobierno; al año hay 3 o 4 fiestas y la concejalía de festejos es la que ayuda y colabora para organizarlas; no hay ningún control sobre si los participantes van bebidos; en la fiesta siempre hay personas mayores, como XXXXXXXXXXXXXXXX, un señor que reside en Cataluña, que tiene unos 80 años y siempre acudía a la fiesta; también un vecino del pueblo, llamado XXXXXXXXXXXXXXXX, de unos 60 años, además suelen acudir los padres de los quintos; al día siguiente del accidente se decretó luto; se dio parte a la compañía aseguradora el 21 de mayo de 2012; los empleados con los que cuenta el Ayuntamiento son, un auxiliar (con funciones administrativas), un agente de desarrollo local, una secretaria-interventora a tiempo parcial compartida con otro pueblo (Lorcha), una bibliotecaria, una limpiadora (que trabaja 5 horas al día), un funcionario de mantenimiento y siete concejales, incluido el declarante; ninguno de los concejales cobra por su trabajo, sólo por acudir a los plenos, por los que se les abona 35 euros; suelen haber 4 plenos al año; V.M.C.P. no cobraba por su cargo de concejal; es agricultor y siempre se ha dedicado a trabajar en el campo; reitera que se trata de una fiesta ancestral, con mucho arraigo y de carácter familiar, pues todos los integrantes han sido quintos en algún momento de su vida y han participado; se cortan las cortezas

del chopo en la plaza, y los niños juegan con ellas alrededor; el folleto publicitario de la fiesta está subvencionado o pagado en parte por la Diputación; algún año fue Canal 9 a grabar la fiesta; nunca han recibido ningún escrito u oficio aconsejando medidas correctoras y ninguna entidad provincial, autonómica o estatal, les ha requerido para que adoptaran medidas de seguridad; alguna vez ha ido la Guardia Civil a patrullar, y nunca les han dicho que la fiesta no se podía hacer, tal y como se desarrollaba; hace unos años se puso un tercer punto de apoyo para asegurar más (una tercera tijera), porque antes se utilizaban dos tijeras; la verticalidad se consigue poco a poco abriendo las tijeras y empujando; la participación es voluntaria, multitudinaria; no le consta que haya habido nunca una emergencia; en la fiesta participan personas mayores y pequeñas; en la acción de levantar el chopo hay hombres y mujeres; el declarante no es de Planes, es de Valencia, pero reside en Planes desde que tenía 25 años, y ahora tiene 51, pero ha participado toda su vida en la fiesta porque su padre era de Planes; es Alcalde del Municipio desde el año 2003; la póliza con OCASO se contrató por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en el año 2004, y se ha seguido hasta ahora con la misma compañía; no se contrataba una póliza especial; el Ayuntamiento pagaba directamente a la banda para pasacalles; el declarante no es licenciado, es administrativo; nadie le advirtió que se estaba incumpliendo algún trámite; lo último que se revisó fue la póliza; no hay policía local, ni alguacil; el puesto de la Guardia Civil más cercano está en Muro Alcoy, a 12 kilómetros; nunca se detectó ningún riesgo.

El acusado **V.M.C.P.**, previa lectura de sus derechos, y manifestar su voluntad de declarar, explicó que en la fecha del accidente era Concejal de fiestas; conoce la fiesta de toda la vida; las tijeras son dos palos coordinados, atados, se abren y se cierran, hay varias medidas; se atan con cuerdas, el chopo va subiendo; al chopo se atan unas cuerdas y la gente tira de detrás de las tijeras, no hay polea, no hay tope de seguridad; las tijeras se guardaban en un local que tiene el Ayuntamiento; cada año se comprobaba si estaban bien, y si no se cambiaban; se daba la llave del almacén a los quintos y éstos sacaban las tijeras; de un año para otro se revisan por los veteranos, por la gente del Ayuntamiento, o por el que trabaja de mantenimiento; no sabe porqué no se habían previsto los riesgos o hecho un plan de riesgos; no sabe si había protección civil; ambulancia no había; la fiesta es de la gente mayor y de las personas;

la organización de la fiesta se hace entre todos; se enteró del accidente porque le llamó el Alcalde, él no estaba; si existía normativa sobre festejos no fue advertido por nadie; nadie le advirtió del peligro como se estaba haciendo la fiesta; si la gente viera peligro no se pondría debajo; las fiestas de Planes son la de la Planta del Xop, San Blas y las patronales; el Ayuntamiento tiene la obligación de organizarlas; no sabe dar respuesta clara sobre si la fiesta del chopo se trata en el Pleno; las decisiones en los festejos van acompañadas de todos los concejales; es verdad lo que dijo en instrucción sobre la adopción de medidas seguridad y que nadie supervisa nada; participan menores, mujeres, todo el pueblo; no hay control de los que van a participar; se trató en el pleno, que por respeto a la familia de momento no se volviera a celebrar la fiesta; hay gente que reclama volver a hacer la fiesta; cesó del cargo en la última legislatura; autorizó aunque fuera de forma verbal la realización de la fiesta; nunca ha considerado que la fiesta fuera un acto peligroso; tiene 61 años y siempre que ha podido ha estado en una tijera; la fiesta siempre se ha hecho de forma consuetudinaria y tradicional, formaba parte de la costumbre que le dijeran al Ayuntamiento, de forma informal, la fecha en que se hacía la fiesta; no se trataba de una solicitud de permiso como si construyeran un edificio; no se pedía permiso para el chopo que cogían, lo elegían voluntariamente los quintos; en cada tijera había de diez personas o más; en las cuerdas hay mucha gente, personas mayores, pequeños; tiene certificado de estudios primarios.

TERCERO.- Dichas versiones deben ponerse en íntima relación con el resto de las pruebas testificales y periciales practicadas en el plenario.

Así, el testigo **XXXXXXXXXXXXXXXX** manifestó, bajo juramento, que es vecino de Planes, no tiene relación con ninguna de las partes; está familiarizado con la Planta del Xop; después de comer se va a por el Xop, se tala y se lleva a la plaza; ese año participó, estuvo en la comida; conoció al fallecido; no sabe si bebió o no; fueron a la tala del árbol; se baja a la chopada; previamente los quintos han elegido un chopo; se tala, cae y entre todos lo llevan a hombros; lo condujeron de la forma habitual; el declarante participa en la fiesta desde los 18 años; ese año no recuerda a que hora se hizo el izado, cree que a la hora habitual, alrededor de las 20:00-20:30 horas; el chopo se pela, y se preparan unas tijeras para subirlo; se planta sobre las 9; había tres tijeras, estaban a mitad y se escuchó como giraba o algo; hay gente mayor que va dando instrucciones

con una señal llamada "oissa o ande" y todos suben; suelen haber entre 15 o 20 personas por tijera; en el extremo opuesto hay atadas unas cuerdas, pero se tira de ellas cuando ya está el chopo en el agujero; fue muy rápido, se oyó un chasquido, en la misma tijera que se encontraba XXXXXXXXXXXXXXXX; las cuerdas todavía no estaban tensando, alguien dio la voz y se apartaron todos, y pilló a varios; vio a una persona como rodaba, pero no le dio; cree que lo que golpeó a XXXXXXXXXXXXXXXX fue la tijera, cayó al suelo y rebotó sobre él, y luego le cayó encima el chopo; no recuerda que en ese momento hubiera alguien del Ayuntamiento; la gente decide participar en el izado espontáneamente; al recibir el golpe, intentaron reanimarlo, se llamó a la ambulancia, porque no había en el pueblo; no sabe si en el pueblo había alguien de protección civil, la ambulancia tardó aproximadamente una hora; en ese momento no había danzas ni banda de música; no recuerda que ese día se utilizara una retroexcavadora o tractor; no lo sabe, cuando él llegó ya estaba el chopo talado en la chopada y lo sacó a hombros; no recuerda que hubiera un herido talando el chopo; exhibida la fotografía obrante al folio 61 del Tomo I, manifiesta que es la forma en que se iza el chopo; no está seguro si fue ese año; en un momento determinado se escuchó algo y se intentó aguantar y se llevó todo por delante; no sabe si hubo algún comportamiento anormal; el declarante estaba agachado aguantando la tijera; hay varias personas aguantando la tijera, es necesario el movimiento de todos para moverla; uno solo no la puede mover; se oyó un ruido, intentaron aguantar y se iba abajo; vio una persona que rodó y no le dio; el poste unido al peso del chopo es lo que le dio al fallecido; no sabe los metros de longitud del chopo; ese año no era de los más grandes; las personas deben ser conscientes de los riesgos a los que se pueden exponer; algún otro año cayó, pero no cogió a nadie; los motivos por los que cree que cayó ese año puede ser, porque venció el peso, no había gente suficiente, o porque se resbalaran; no sabe si después de que alguna vez se haya caído el chopo se tomaron medidas, cree que no; el Ayuntamiento suministra las vigas y las cuerdas para sujetarlos; no se quebró ninguna viga ni las cuerdas y no estaban en mal estado; se ratifica en su declaración obrante al folio 15 del Tomo I prestada ante la Guardia Civil; los quintos, en la fiesta de la harina, piden aguinaldo para recaudar dinero para poder traer una orquesta el día de la Planta del Xop; la orquesta es contratada de fuera; hay un grupo del pueblo de dolçaina, y tocan, pero no sabe en que momento lo hacen; lleva unos 20 años participando activamente en esta fiesta, antes de ser quinto, desde pequeño, los padres suelen ayudar en esa

fiesta; el declarante no tiene hijos; no recuerda que en todos los años que lleva participando haya tenido que ser asistido algún herido; nunca ha tenido la sensación que se estuviera jugando la vida; las bebidas las ponían también los quintos, la bebida “mentira”, que es café-licor, también, pero la bebe quien quiere; es cierto que dijo en su declaración judicial manifestó (folio 140) *que cree que XXXXXXXXXXXXXXXX, o se tropezó o se le enganchó la zapatilla que impidió que pudiera salir del lugar en el que estaba, que lo vio caer de espaldas*. También dijo en su declaración en la Guardia Civil (folio 15), que el accidente se produjo sobre las 22:00 horas.

El testigo XXXXXXXXXXXXXXXX, manifestó en el plenario que el fallecido era amigo de su cuadrilla; era campaña de recogida de cereza y no estuvo en la comida porque estaba trabajando; se incorporó al traslado del chopo; participó en la plantà; llevaba 5 o 6 años participando en sea fiesta; se cortó el chopo y decían que era muy grande; es elegido por los quintos, van días o semanas antes a elegirlo; se cortó, y hubo problemas para sacarlo y se llamó a una retro; el camino estaba mal; cuando se encarriló la retro, enganchó el chopo y se rompió la cadena de acero; después vino un tractor y arrastró y reventó también la cadena; fueron a buscar una cuerda de fuerza y se puso de culo para que no se levantara y una vez que llegan a la zona asfaltada ya lo llevan a hombros; todo esto retrasó la hora de la plantà; un chico se hizo daño, no sabe si con el cable de acero o con la cadena del tractor; la hora del izado fue mas tarde de lo habitual; todo el mundo daba su opinión, él también; no había ninguna autoridad que coordinara; el declarante estaba en la primera tijera; el fallecido en otra distinta; había 12 o 13 personas por tijera; eran pocos, estaban cansados, el chopo era muy pesado, cada vez que lo intentaban levantar costaba mucho; se hizo una estampida por parte de todos; las cuerdas son para ayudarte; vio a la persona fallecida y le dio un ataque de ansiedad, le tranquilizaron y luego le cargaron en una ambulancia; allí no había ambulancia, no había personal sanitario en el pueblo, ni protección civil; nunca se dieron instrucciones previas; las luces que había eran las normales del pueblo; no habían focos; la plaza estaba cortada al tráfico; no recuerda si la tijera o el árbol alcanzó a otro chico; XXXXXXXXXXXXXXXX era la primera vez que acudía a la fiesta; el chopo era el más grande de lo que el declarante ha plantado en años; hasta ese día no era consciente del riesgo, ahora si que sabe que la fiesta es peligrosa; a la hora de ayudar había poca gente; preguntado por su declaración obrante al folio 112, Tomo I, en que

manifestó que en el momento de la plantà habían entre 15 o 20 personas por tijera, manifiesta que le parecen pocas personas, que no habían suficientes personas para relevarse; era amigo intimo del fallecido XXXXXXXXXXXXXXXX; el declarante le invitó a la fiesta; no recomendó a XXXXXXXXXXXXXXXX que no participara, no pensó en ello; no veía el peligro, lo ha visto después; el Ayuntamiento tendría que haber marcado pautas de organización; apoya a la familia, quiere que se haga justicia; participó varios años en la fiesta de forma consecutiva, aunque algún año falló; nunca vio que cayera el chopo; su amigo XXXXXXXXXXXXXXXX estaba allí cuando el declarante llegó; XXXXXXXXXXXXXXXX era muy deportista; antes de levantar el chopo XXXXXXXXXXXXXXXX se comió un sándwich y un aquarius; XXXXXXXXXXXXXXXX no estaba bebido.

La testigo XXXXXXXXXXXXXXXX manifestó que XXXXXXXXXXXXXXXX era un amigo especial de la declarante; participó en los festejos; llegó a medio día, cuando se celebra la comida en el pueblo; se fue a por el chopo, se taló; durante la comida estaba próxima a XXXXXXXXXXXXXXXX, pero no juntos; XXXXXXXXXXXXXXXX bebió lo normal; trasladaron el árbol hasta la plaza principal; la declarante había participado tres veces en la misma fiesta; lo normal es dejar la elección del chopo en manos de los quintos; aquel día tuvo que intervenir una retro y después un tractor porque el chopo era enorme, y la chopada de difícil acceso; manifiesta literalmente que “diría” que era más grande que otros años; había desorganización; se llamó para que viniera una retro y después se avisó para que viniera un tractor; nadie controlaba el acceso; entre todos coordinaban; habían 8 o 9 personas por tijera; la declarante estaba en la segunda, a la izquierda; el chopo era muy grande y se salió de las tijeras; no había ambulancia; hace años le pareció ver una ambulancia, aquel año no; no había protección civil; la copa del árbol llegaba subidas las escaleras, por eso cree que era más alto que otros años; la iluminación era poco adecuada; no es amiga de XXXXXXXXXXXXXXXX, éste le llamó a las tres semanas del accidente y le dijo que a sus padres nadie les había explicado nada de lo que había pasado, y la declarante les llamó para contarles todo, y actualmente tiene relación con ellos para apoyarles en todo esto; ha venido a juicio a contar lo que pasó; no le vio fumar Cannabis, XXXXXXXXXXXXXXXX fumaba socialmente.

XXXXXXXXXXXXXXXX, manifestó que no tiene relación con ninguna de las partes; es de Muro de Alcoy; estuvo en la Planta de ese año, no había estado nunca antes; estaba de

espectador; no había ambulancia, policía, guardia civil y protección civil; tampoco habían medidas de seguridad; no vio que coordinara nadie; estaba cerrado el tráfico a los vehículos; se habló de cortar un trozo del chopo porque era muy pesado y no podían con él; se deslizó el tronco, y eso aplastó al muchacho; fue a verlo y vio que estaba agonizando; no vio llegar la ambulancia; cuando se fue para Muro de Alcoy se cruzó con la guardia civil, habían pasado unos 45 minutos; para ir a Planes desde Muro es carretera comarcal; vio que había peligro; no sabe si las tijeras eran bastantes grandes como para salirse el árbol; fue a la fiesta con un amigo llamado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; no declararon en la guardia civil, declararon en diciembre de 2013 en el Juzgado de Alcoy, contactaron con él mediante una amiga de la madre del fallecido, la madre del fallecido se lo pidió; no ha mantenido relación con la familia; el declarante llegó a Planes a las 17:00 horas, no fue a la comida; fue directo a la plaza y esperó allí en un bar hasta que llegaron con el chopo sobre las 19:30-20:00 horas.

El testigo XXXXXXXXXXXXXXXX, afirmó bajo juramento que acudió a la fiesta como espectador; era la primera vez que iba; fue con XXXXXXXXXXXXXXXX; no había ambulancia, protección civil o guardia civil; organizaban la fiesta los propios festeros; había poca gente para izar el árbol, considera que faltaba mas gente; había unas crucetas con una plancha de metal; no había arnés o polea; cree que el árbol se fue de la parte trasera; vio como salían todos corriendo y caía el tronco; hubieron gritos y salieron todos corriendo, alguien asistió al muchacho; el declarante y su amigo se acercaron para ayudar, pero en las condiciones que estaba no pudieron; pasado bastante tiempo se marcharon hacia Muro y vieron la ambulancia y guardia civil en dirección a Planes; habían pasado más de 30 minutos; se comentó la posibilidad de cortar el árbol, pero al final no se hizo; no vio que nadie tirara de las cuerdas; solo vio tres crucetas, sobre su declaración prestada, obrante al folio 11, Tomo 2, aclara que el declarante y su amigo estaban en el bar de la plaza; la zona estaba iluminada.

El testigo XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, declaró, bajo juramento, que es vecino de Planes; no tiene relación con ninguna de las partes acusadoras y acusadas en el proceso; ha participado en la fiesta varios años, 6, 7 u 8; en 2012 participó en todo; no hay una hora normal de llegar, el horario de la plantà depende de donde se coja el

chopo; en cuanto a las dimensiones del chopo, afirma que ese año no era mas voluminoso que en otras ediciones; el acceso tampoco no era más dificultoso que otros años; nadie verifica el control de acceso; desconoce si alguien da instrucciones, pero cree que no; alguien da un aviso, pero no hay un portavoz concreto, suele ser gente veterana; la tijera en la que se encontraba el declarante es la que venció primero; habían 3 tijeras, el declarante estaba en la segunda tijera; en el lado derecho de cara a la base del árbol; preguntado sobre lo que pasó, explicó que pudieron ser varias razones: que faltara gente, que resbalaran, que resbalara la base de las tijeras, que no estuviera bien apoyada la base de la tijera o que la gente estuviera muy cansada; en su opinión no tenían bien sujeta la tijera y cedió; las tijeras son vigas de madera que se ponen en forma de cruz y con ellas se va subiendo el árbol; no recuerda como es la base de la tijera; no ha sido la primera vez que ha caído el chopo; recuerda haber caído al suelo, pero perdió el conocimiento y el zumbido del chopo en el suelo es lo que le despertó; no recuerda si había Guardia Civil, algún año si que había; estuvo un rato en la tala del chopo en la chopera; vio que no se pudo sacar con medios humanos, pero no ha sido solo ese año; no recuerda si se llamó a un tractor; cree que alguien tuvo alguna contusión, pero no lo vio; el declarante llegó antes de talar el árbol, pero no lo vio caer porque se fue a la carretera y se quedó ahí hasta que subieron el chopo; vio pasar un tractor; XXXXXXXXXXXXXXXX estaba a su izquierda, hombro con hombro, no estaba agachado sujetando la base del tronco; se cambia constantemente de posición; se oyó un murmullo cuando la tijera empezó a moverse; soltaron y salieron corriendo; al declarante le alcanzó en la pierna izquierda y le rompió la tibia; le dio la tijera que sujetaba; conforme se despertó escapó de ahí, se puso en la acera y vino el padre de un amigo a ayudarlo y a decirle que tenía rota la tibia; la ambulancia tardó un cuarto de hora o media hora; el que acude a la fiesta es consciente de que hay un peligro; las cuerdas es una ayuda para elevar; sabe que había personas del Ayuntamiento viendo el evento; nunca ha hablado con los abogados de los acusados, hoy es la primera vez que les ha visto; en el Juzgado de Alcoy dijo la verdad; a los quintos se les deja solos para todo; es una fiesta transmitida de padres a hijos; ha participado el padre del declarante, su abuelo; debe haber un empujón conjunto de las tijeras; nunca había habido un accidente de esta gravedad; había iluminación reforzada, como manifestó en el juzgado de instrucción; el declarante ha sido quinto, y los que van a celebrar la fiesta, se encargan de todo y hacen cosas para recaudar dinero, como en la fiesta de la harina,

venden lotería, etc., para poder comprar la comida y bebida que pagan en la fiesta los quintos, y si les falta dinero paga algo el Ayuntamiento; no se pide permiso específico para la fiesta, todo el mundo sabe cuando se hace; nadie ha presionado al declarante para lo que tenía que declarar.

Depuso el **Guardia Civil** con placa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, manifestando que está destinado en el puesto de Muro de Alcoy; fue el primero en llegar, Planes corresponde a la jurisdicción de Muro; la hora no lo recuerda; recibieron aviso de la central de la Guardia Civil y del Sargento Comandante de puesto; cuando llegaron la ambulancia ya estaba allí; llovía mucho, tardaron más de la cuenta; no tenía constancia de que les avisaran de la celebración del festejo; no recuerda dimensiones del chopo; el atestado sobre la inspección ocular lo debía hacer la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Villena; los hechos ocurrieron en una plaza, con iluminación normal; cuando llegó el declarante el hecho ya se había desencadenado; la investigación es de policía judicial, ellos solo acordonaron la zona; la comprobación de permisos y todo eso entendieron que correspondía a policía judicial; **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, no tuvo ninguna intervención como agente, estaba presente porque vive ahí, pero no estaba de servicio; desconoce la iluminación que había en el momento del accidente, sabe la que había cuando llegó; llevaba 8 años en Muro de Alcoy prestando servicio; sobre si conocía la existencia de la fiesta de la Planta del Xop manifiesta que había oído algo; sabe que es una tradición; durante los años de servicio nunca han recibido una orden en el sentido de que fuera peligroso asistir a la fiesta, o que fuera necesario obtener una autorización para celebrarla.

Depuso igualmente como testigo el miembro de la policía Judicial de la **Guardia Civil** de Villena, agente con placa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**; recuerda que era una noche de sábado y le llamaron para realizar una inspección ocular, cree recordar que sobre las 22:00 horas; tardaron en llegar una hora desde que se produjeron los hechos; el declarante era el agente de mayor graduación; normalmente hacen la inspección de forma conjunta con los compañeros de la Guardia Civil; el atestado de inspección ocular es firmado por todos; su cometido fue la inspección técnico-ocular y ver el escenario en el momento de llegar; no puede precisar la longitud del chopo, no se llegó a medir; era de noche, había mucha gente, el chopo se encontraba tumbado en el suelo; el grosor sería

de 30-40 cmtrs.; se pueden ver en las imágenes de la inspección; sobre el peso del chopo, manifiesta que no disponen de medios para pesar, ni son expertos en esa materia; no requirieron medidas de seguridad; instruye la unidad territorial de Muro, y la policía judicial de Villena realiza la inspección técnico-ocular; la instrucción de diligencias para la toma de declaraciones correspondía a Muro de Alcoy; si les hubieran remitido solicitud de colaboración para encargarse de la investigación, lo habrían hecho, pero a la policía judicial de Villena sólo le correspondía realizar la técnico-ocular; sobre si observaron alguna medida de seguridad, afirma que sólo habían cuerdas y maderas para apuntalar el chopo, para que fuera posicionado en la arqueta; no había otro material; recuerda que las cuerdas estaban en el suelo; no había ningún soporte para la base de las tijeras, estaba todo en el suelo, se remite a las fotografías; no recuerda donde estaban los restos de sangre; no recuerda si los restos de sangre estaban en el chopo o en el puntal.

El agente de la **policía judicial** de la **Guardia Civil** de **Villena**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, participó en la inspección ocular y levantamiento del cadáver; sobre la fiesta de la Planta manifestó que, según relatan personas de Muro, se trata de una festividad ancestral; el chopo tendría 15 o 20 metros; no lo miden, no es un dato importante sino el daño que puede efectuar; no sabe la anchura, nadie les pidió que lo midieran o pesaran; no vio ninguna medida de seguridad, solo los travesaños y las cuerdas para tirar los vecinos; no sabe donde estaban los restos de sangre; nunca había oído hablar de esa fiesta; ahí llevaba destinado desde 2008; nunca les han requerido para intervenir durante la fiesta.

El **policía judicial** de la **Guardia Civil** de **Villena**, agente **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, afirmó que les requirieron por la existencia de una persona fallecida, durante las fiestas típicas de la localidad de Planes; al parecer cortaban un chopo, lo llevaban al pueblo y luego lo izaban; comentaron que cayó; sobre si se procedió a la medición de la longitud del chopo, se remite a lo que se refleja en el atestado de la inspección ocular; cree que sobre 15 o 20 metros; lo que ponga en la inspección ocular hecha momentos después; considera que no fueron a medir el chopo, sino a tomar datos de lo sucedido; no recuerda la iluminación que había; sobre si observó alguna medida de seguridad, afirma que llegaron mucho después de suceder los hechos; llegaron sobre las 12 de la

noche; no recuerda donde se encontraban los restos de sangre; en el reportaje salen las imágenes; hacen lo que les encomiendan.

El testigo **XXXXXXXXXXXXXX**, afirmó ser vecino del pueblo; nacido en Planes y residente en el municipio; es técnico agrícola; en el periodo de 2003 a 2011 fue concejal de fiestas (durante dos legislaturas); a nivel personal ha participado todos los años, y como quinto también; no se conoce ni el origen de la fiesta; es una fiesta muy sentida y arraigada en el pueblo; nunca, durante su mandato, recibió ninguna indicación, como Ayuntamiento para que adoptara algún tipo de medidas; recuerda que alguna vez fue retransmitida la fiesta por Canal 9; no recuerda que hayan ido políticos a la fiesta; se encontraba presente el día de los hechos, participó y estaba sujetando una de las cuerdas; todavía había luz natural en el momento del desprendimiento del árbol; sobre la iluminación, manifestó que suele reforzarse con focos adicionales porque se hacen espectáculos; sobre las dimensiones del chopo afirmó que era normal como todos los años, los ha habido mas grandes e incluso mas pesados; el Ayuntamiento tiene las cuerdas y las tijeras; se dieron cuenta hace años que las tijeras y cuerdas era cosa del Ayuntamiento por seguridad, para que no cogieran cualquier cosa; la comida la pagan los quintos, ellos sufragan la fiesta, convidando a amigos y vecinos; los quintos llevan la bebida; tiene 55 años; muchos años bajo el chopo; nunca ha pensado que se jugaba la vida; no tiene hijos; nunca hasta entonces hubo ninguna persona lesionada; la tradición pasa de padres a hijos; los padres suelen acompañar, sobre todo desde que se rebajó la mayoría de edad a los 18 años; siempre hay una persona que da la voz de “oïssa”,y es cuando todos tiran; las personas mayores intentan coordinar, como XXXXXXXXXXXXXXXX o XXXXXXXXXXXXXXXX; las mujeres también, aunque normalmente ellas tiran de las cuerdas; pero si quieren ponerse bajo las tijeras también pueden hacerlo; aquél día Santiago era quien hacía el grito de “oïssa”; sobre el control de acceso a la plaza para participar, el control era únicamente para que no entraran coches; a los alcohólicos se les apartan porque están molestando; no se informa a la gente lo que tiene que hacer, porque todo el mundo ya sabe como va; también participan las personas que no son del pueblo y van por primera vez, y son los amigos quienes suelen informarles como funciona la fiesta; el declarante nunca había visto que el chopo cayera; la gente mayor liga las cuerdas, como una prevención; el declarante sujetaba las cuerdas, cuando el árbol esta en el

suelo las cuerdas no tienen utilidad; el árbol estaba a medio subir; no sabe la causa de la caída del chopo; no vio al herido, estaba en la otra parte; ahora no es concejal; la concejalía sigue existiendo; a veces el Ayuntamiento echaba una mano a los quintos; no sabe si ese año el Ayuntamiento colaboró; el accidente ocurrió sobre las 20.30 o 20.45; los focos se colocan en la plaza; sobre si la fotografía obrante al folio 61, Tomo I, es del día de los hechos, diría que no, porque se ve un árbol muy plantado, ve que es muy de noche; la organización de la fiesta es de los quintos; para saber el día de la celebración, manifiesta que se solía hacer el cuarto día después de la pascua de pentecostés; no todos los años se alquilaba un grupo electrógeno; siempre iban un poco coordinados; la organización de la fiesta no pasaba por el Pleno, es una fiesta de los quintos; no se pedía licencia y autorización para poder hacer la fiesta; se ponían vallas protectoras para que no pasaran los coches; en su época, el declarante sólo cobraba si acudía a los Plenos; sobre 20 o 30 euros, y en la época que fue concejal se hacían 4 plenos ordinario, y en la actualidad solo se hacen tres.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es el administrativo del Ayuntamiento de Planes; nació en el mismo pueblo y ha vivido ahí toda la vida; entre semana suele haber unos seiscientos o seiscientos y pico de habitantes; es administrativo del Ayuntamiento desde el año 1991, es decir, ha estado en varias formaciones políticas; no ha habido variación sobre la organización y funcionamiento de la fiesta en función del grupo político que haya habido; no se tenía que solicitar permiso para poder hacer la fiesta, en estos casos no se abre un expediente administrativo; la comida y la bebida la pagaban los quintos; una vez televisó la fiesta Canal 9; el Ayuntamiento nunca ha recibido instrucciones de ningún organismo prohibiendo la celebración de la fiesta; nunca les han puesto impedimento alguno para la celebración; el declarante ha participado una o dos veces en la fiesta; que recuerde, nunca hasta entonces había habido alguna incidencia; las tijeras y cuerdas las facilita el Ayuntamiento; es una tradición que se ha transmitido de padres a hijos; es una fiesta sectaria, en la que participa todo el pueblo; en el pueblo no hay médico, alguacil, policía local o protección civil; hay un médico de lunes a viernes, en un horario, pero si hay alguna urgencia hay que desplazarse hasta Muro de Alcoy; nunca el secretario o interventor del Ayuntamiento han advertido que se estaba incumpliendo alguna normativa; cuando ha participado en la fiesta no ha tenido la sensación de que se jugaba la vida; había un secretario, llamado Paredes, que se fue

antes de que ocurriera el accidente, y no sabe si advirtió algo sobre la fiesta al Alcalde o concejales; en algunas cuestiones decide el Alcalde y en otras el concejal; no sabe las funciones de cada uno; la colocación de vallas es automática, nadie da la orden; si es necesario un grupo electrógeno lo contrata el Ayuntamiento; el declarante no lleva las cuestiones económicas; Planes tiene tres pedanías; nunca le dieron instrucciones sobre que se debía avisar a la Guardia Civil, a Protección Civil o a una ambulancia para que estuvieran presentes en la fiesta.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijo ser vecino de Planes; tiene 63 años; ha participado desde que era pequeño prácticamente todos los años;; han participado sus abuelos, sus padres, participa todo el pueblo; ese año participó como espectador; era de día; ha participado muchas veces en el izado del chopo, bajo las tijeras, porque tiene un hijo y una hija y les ayudaba; nunca había ocurrido nada, y nunca ha percibido que existiera peligro; alguna vez estuvo en la fiesta Canal 9; nunca ha sido político; su profesión es la de mecánico; alguna vez que otra ha pasado la Guardia Civil, han visto como iba la fiesta y han continuado el servicio; nunca les han parado la fiesta; vio el chopo ese año; el declarante ha visto chopos mas grandes y largos que los de ese año; vio el accidente, el chopo se vino abajo y las tijeras cayeron golpeando al chico; al chico le golpeó la tijera; sobre quien dirige a los participantes manifiesta que se dirigen ellos mismos, los participantes lo hacen todo; habían tres tijeras; el chico estaba en la primera tijera mas cercana al chopo; suelen haber unas 20 personas por tijera; hay una chapa de hierro donde está el agujero y para frenar la tijera se pone el pie, el chico fallecido no tenia el pie puesto; el chico que resultó herido estaba en la otra tijera, en el mismo lado; no sabe por qué cayó; las medidas de seguridad eran las cuerdas, pero no se usan hasta que el chopo no alcance altura suficiente; las cuerdas todavía no estaban tensas; las cuerdas no evitan la caída del chopo; sobre la fotografía obrante al folio 61, del Tomo I, afirma que se trata de la plaza de Planes y corresponde a una plantà, pero el declarante diría que no se trata de la del año 2012 porque el chopo está muy arriba y es muy de noche; nunca ha visto caer el chopo; ha faltado algún año a la fiesta; no tienen ninguna señal prevista para caso de caída del chopo porque nunca había caído; en mayo se hace de noche a las 8 o 9 de la noche; los primeros auxilios los dio una médico y una enfermera que viven en el pueblo, y acudieron enseguida.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestó tener 49 años, es vecino de Planes, abogado de profesión; ha participado muchas veces en la plantà del Xop; es una actividad que conoce de niño, es una de las fiestas principales del pueblo, que se inculca de padres a hijos y participa todo el mundo; ha visto en la fiesta algún año a Canal 9; también se televisó en un programa llamado Aitana; puede que en alguna ocasión estuviera la Guardia Civil; nunca les han parado la fiesta, ni cree que se haya dado alguna directriz por la que no se pudiera celebrar; la fiesta se hace de forma armónica entre todos, se dan avisos para concentrar la fuerza y empujar al mismo tiempo, al aviso de “oissa”, o “andes”; el chopo de 2012 no era el mas grande que se ha plantado; antiguamente se hacía a mano el agujero y cabían chopos mas grandes, ahora el agujero está limitado por la dimensión que tiene el hoyo; el declarante ha sido quinto; en su época hacían lotería, aportaciones, los quintos pagaban todo con el dinero que recaudaban; nunca ha tenido la sensación que se haya jugado la vida, de lo contrario no habría participado; tiene hijos pero son pequeños para participar; participa gente de variada edad, y mujeres; el día del accidente estaba participando; el tronco estaba ya metido; la fecha de celebración de la fiesta la conocía todo el pueblo; y dependía, normalmente cuarenta días después de Pentecostés; el declarante no tiene nada que ver con la Diputación; en la época en que fue quinto, hace 20 o 25 años, se hacía “a mano” el agujero para plantar el chopo; en el momento del accidente el declarante estaba en una tijera; estaba en la segunda; parte izquierda; mirando la copa; no sabe en que tijera y lado estaban el fallecido y el herido; no sabe por qué el chopo se salió del hoyo, pero ya estaba dentro; su opinión es que el tronco rotaría y se desestabilizó; la gente soltó las tijeras y salió corriendo; nunca ha pensado que se pudiera caer, ahora ya si; las medidas de seguridad han sido siempre las tijeras y las cuerdas, éstas se utilizan, se tira de ellas, cuando el chopo ya se ha izado suficientemente.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestó que es vecino de Planes; en la actualidad es concejal de cultura; estaba en la fiesta ese año; había luz en ese momento; sobre las referencias, a nivel cultural de la fiesta del chopo, afirma que referencias escritas no existen, sólo programas de fiestas desde hace 20 años; en la Masia “La Folla”, hay una pared con unos frescos que datan del año 1856-1857, que reproduce la Planta al Xop con bailarines; se trata de una fiesta pagana; los antropólogos la sitúan en fechas prehistóricas; el declarante está prejubilado; ha participado muchos años en la fiesta;

también participó como quinto y muchos años ha colaborado con las tijeras; el año de accidente no participó, las personas mayores dirigían las operaciones; fue nombrado como concejal en el año 2015; no tiene constancia que existiera alguna orden por la que no se pudiera celebrar la fiesta; a su edad ha visto plantar muchos chopos, y ese año le parecía igual que cualquier otro año; el grupo de quintos de cada año decide el chopo que van a talar, siempre hay asesoramiento de algún padre; se busca un chopo recto, alto, de buena copa; cuando cae el chopo, se cortan las ramas para dejar una especie de cabeza y la corteza se quita cuando está ya en la plaza; con la corteza hacen juegos, se golpea con ellas en el suelo; nunca ha habido ninguna emergencia; no existe un programa de la fiesta de la Planta como tal; no estaba en el momento del accidente, vive al lado; no ha leído crónicas sobre los hechos que sucedieron; sobre el contenido del folio 58, Tomo I (artículo levante-emv.com), en su parte final, manifiesta que lo que pone en el documento no coincide con la realidad que ha vivido siempre; coordinar todo no es fácil, pero se ha llevado a cabo muchos años; alguna vez en el inicio de izar el chopo ha caído, pero no ha pasado nada; la maniobra de izado es con las tijeras, y alcanzado un grado de inclinación se tira con las cuerdas; que caiga no es lo habitual; las personas que están en las tijeras, normalmente, levantan con los pies y las manos; en la base hay protección, no son troncos secos; unos días antes de la fiesta los quintos buscan los troncos y las cuerdas para las ataduras; no recuerda donde se guardaban, solían estar en un descampado, pero no recuerda un sitio específico para eso; la existencia de dos tijeras obligaba a concentrar más las personas, y se incrementó una tijera más para disponer de más ayuda.

Del contenido de tales testificales se puede concluir, que no ha existido coincidencia sobre las dimensiones del chopo talado en el año 2012, si era de mayores dimensiones que en años anteriores; el motivo por el que el árbol cayó; el tiempo que tardó en llegar la ambulancia y la Guardia Civil; o quién de ellos llegó primero. Concretamente, sobre la causa de la caída del chopo se han ofrecido diferentes hipótesis: *“...que no se llegó a insertar bien la base del chopo en el agujero para levantarlo o bien que giró sobre si mismo el chopo y que se desencajó del lugar (Sr. XXXX folio 15, Tomo)”*, y en relación a ello, cuál fue la razón por la que el joven XXXXXXXXXXXXXXX no pudo alejarse del chopo (XXXX: *“...mientras se caía el árbol vio un joven que quería huir del lugar y QUE SE RESBALÓ y cayó de espaldas golpeándose la cabeza en el asfalto”*; tampoco ha

existido coincidencia sobre las dimensiones del chopo, si quiera entre los miembros de la guardia civil intervinientes, entre 15 y 30 metros (*..el chopo tenía una longitud aproximada de unos 20 metros de altura...*) (folio 13 del atestado de la Guardia Civil de Muro); al igual que los testigos, que hablaron de dimensiones entre 15 y 20 metros.

Las contradicciones existentes entre las testificales practicadas en el plenario, se desprenden igualmente del contenido de los atestados levantados al efecto por los agentes de la Guardia Civil intervinientes el día de los hechos, tanto de la Guardia Civil de Muro de Alcoy, como de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Villena, sin que quedara clarificado que funciones correspondía a cada uno de los puestos, quien debía investigar, qué y hasta donde; que debía contener o no la inspección ocular; si al tratarse de una inspección técnico-ocular debía incluir la medida del diámetro, peso y altura del chopo, etc. Así, el atestado Nº 2012-002374-276, del Puesto de Muro de Alcoy, (folios 12 y siguientes del Tomo I), realizado en la madrugada del 20-5-12, a las 03:06 horas, recoge entre otros extremos, contradictorios según las versiones ofrecidas en el plenario que: *“...recibe aviso a las 2:10 horas, por un accidente ocurrido a las 21:30 horas....el chopo tenía una longitud aproximada de 20 metros de altura...uno de los tres apoyos de madera ha cedido provocando la caída del árbol, impactando con dos personas...delegan el levantamiento del cadáver en Policía Judicial de Villena que se persona en el lugar a las 00:00 horas del día 20-05-2012.*

Por otra parte, el acta de inspección ocular técnico-policial de los agentes de la Policía Judicial de Villena, ya parten de un aviso producido a las 22.30 horas del hallazgo de un cadáver “en su domicilio” (f. 22. Tomo I); se hace constar igualmente la presencia junto con los agentes de los familiares del finado y del Alcalde de Planes.

Por lo tanto, ambos atestados, no han arrojado mucha luz sobre los hechos objeto de enjuiciamiento, delatándose en el plenario una situación hostil entre ambos cuerpos, relativo al alcance de las competencias de cada uno de ellos y, en particular, sobre las exactas dimensiones del chopo, su falta de medición y a quien correspondía hacerlo.

CUARTO.- En cuanto a la prueba pericial, y documental relativa a la tasa de alcohol en sangre y otras sustancias en el fallecido XXXXXXXXXXXXXXXX, alegada por las defensas,

previo a analizar la responsabilidad de los acusados y el encaje penal de los hechos, debe desestimarse la aludida responsabilidad civil compartida de la víctima. En este sentido, si bien consta en el Dictamen emitido por el Servicio de Química en fecha 20 de agosto de 2012 (f. 50 TOMO I), que XXXXXXXXXXXXXXXX presentaba una concentración de alcohol etílico en sangre de 0,71 g/l, y en humor vítreo 0,84 g/l, parece claro que esa supuesta afectación es tan solo hipotética, tal y como igualmente se recoge en las contundentes conclusiones contenidas en el informe del Médico Forense (folio 106, Tomo I), en el que menciona literalmente que: *"...se desprende que existe una cuantificación positiva de alcohol etílico de 0,71 grs por litro, dicha alcoholemia se considera de rango bajo y no tiene por qué producir efectos en la conducta del sujeto de manera ostensible"*.

Y esa culpa compartida al 50% que interesa la aseguradora OCASO, de forma subsidiaria a la absolución solicitada de forma principal, no puede tener tampoco favorable acogida, al no considerar responsable al finado XXXXXXXXXXXXXXXX, por el hecho de que no se conformara en acudir a la festividad como espectador, y participara en el izado del chopo, incluso en la parte más peligrosa de la tijera, sin que haya resultado probado que se encontrara afectado por la ingesta de bebidas alcohólicas. Igualmente OCASO impugna la alegada rotura de la cadena de custodia de las muestras tomadas a XXXXXXXXXXXXXXXX, por no haberse alegado en el momento procesal oportuno, considerando que no correspondía a la acusación alegar la misma en el plenario (SAP Alicante de 25.10.2018). Al respecto, fue muy clarificadora la pericial practicada en el Juicio Oral por XXXXXXXXXXXXXXXX (Director del Departamento del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona), quien se ratificó en el contenido del informe obrante a los folios 49 y 50 del Tomo I, afirmando que el informe efectivamente indica que hay alcohol en sangre (otra cosa es la afectación en la persona) y que se detectaron metabolitos de cannabinoides, es decir, que XXXXXXXXXXXXXXXX consumió cannabis, pero no sabe ni cuándo ni cuánto, no pudiéndose determinar si en el momento del fallecimiento estaba afectado por el consumo de cannabis; preguntado sobre el contenido del informe del Médico Forense del Doctor XXXXXXXXXXXXXXXX (folio 106, Tomo I), en el que se concluye que considera de rango bajo la tasa de alcoholemia de 0,71 grs por litro, el declarante coincide con dicho criterio, explicando que las tasas de ambos informes son parecidas porque, si

bien las muestras de humor vítreo se conservan bien, en la medida de alcohol en sangre pueden haber fermentaciones u otras alteraciones, por lo que el valor de alcohol en sangre se da como fiable; sobre el efecto del alcohol en la conducta de la persona, explica que se sabe que la tasa de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, en general, afecta a las personas, pero esa es la tasa establecida para conducir vehículos a motor, pero depende de las características del individuo, su masa corporal, el hábito en la ingesta de alcohol, etc.; sobre la cadena de custodia de las muestras, al no constar número de registro (folio 35 tomo I), manifiesta que efectivamente no consta, y el declarante carece del dato de número de precinto u otras circunstancias de las muestras recibidas, razones todas ellas que deben conducir a desestimar la solicitud de responsabilidad civil compartida de la víctima, al no haber quedado probado la afectación del alcohol en sangre en la persona de XXXXXXXXXXXXXXXX, y cuando pudo haber ingerido cannabis y, en su caso, la afectación que hubiera podido tener para establecer una relación de causalidad con el accidente sufrido.

Y a mayor abundamiento, como sostuvo la defensa letrada de la acusación particular, el precinto de las muestras para análisis químico-toxicológico, así como la fecha de su remisión, no constan identificados en el documento de solicitud obrante al folio 35 del Tomo I y el resultado de las mismas, contenido en el dictamen B12-03040 emitido en fecha 20 de agosto de 2012 (folios 49 y 50) en cuyo encabezamiento, margen izquierdo consta como S/RF. NO FACILITADA, y si bien en el dictamen aparece una referencia, la 6120/09 que no se encuentra consignada en el impreso de solicitud de análisis de muestras, lo que conllevaría igualmente a la desestimación de la petición subsidiaria al no quedar probada la correcta cadena de custodia de las muestras remitidas.

QUINTO.- Respecto al resto de la documental obrante en autos, se alcanzan las siguientes conclusiones:

La fotografía obrante al folio 61 del Tomo I, a la que se hizo permanente alusión por parte de la acusación particular, carece de fecha y hora de su realización, resultando dificultoso observar el contenido de la misma, no quedando probado que dicha imagen se corresponda con la festividad de la Plantà del Xop de 2012.

Se considera probada la hora del fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX, certificada a las 21:30 horas (autopsia, folio 31, Tomo I) horas; como se desprende igualmente del atestado 276 de la Guardia Civil de Muro de Alcoy (folio 13, Tomo I).

Todo el acto de la plantà aparece ilustrado claramente en el disco compacto (CD), obrante al folio 62 del Tomo I, compuesto por cuatro archivos (si bien existe un error en cuanto que uno de ellos corresponda a Plantà de año distinto), reproduce como se lleva a cabo la introducción en la arqueta del chopo, en la que participan multitud de jóvenes, cada uno vestido y calzado de la forma que tiene por conveniente, pero que se vuelca en seguir las instrucciones que no se desprende de la videograbación de donde proceden, porque la finalidad de todos los participantes es que el chopo finalmente quede insertado en el hoyo existente en la plaza.

SEXTO.- En cuanto a la versión ofrecida por los acusados, ambos han ofrecido similares explicaciones en sede policial, y sumarial, si bien inicialmente el Alcalde, Sr. F.J.S.M. fue citado como testigo (así lo interesó la acusación particular al folio 56 vuelta del Tomo I, y en tal calidad se acordó su citación por auto de fecha 25 de septiembre de 2012 (folio 93), quien ni en ese momento, ni con posterioridad al declarar como investigado, y en su declaración en el plenario, haya intentado ofrecer una versión exculpatoria de los hechos.

Concretamente, en la primera de sus declaraciones (folios 116 a 118 del Tomo I) explicó que: *“...el Ayuntamiento no adopta ninguna medida de seguridad especial, al margen de los tres apoyos de madera para levantar el chopo, y las cuerdas que se sujetan a la copa, colocándolo en el hueco existente...que la fiesta del chopo la organizó en 2012 el Ayuntamiento y colaboraron los quintos del año, vecinos del pueblo, pues son fiestas de carácter popular, las cuerdas, tijeras y demás utensilios utilizados, se guardan cada año en el consistorio y se utilizan en la plantà, se revisan cada año por el encargado de mantenimiento del Ayuntamiento...no hay ningún encargado de coordinar la plantà, son los propios quintos los que colaboran..nunca han adoptado medidas de seguridad ni tenían plan de prevención de riesgos...no es cierto que el declarante manifestara al diario información en fecha 26 de mayo de 2012 que se ha proyectado la elaboración de un reglamento para mejorar la seguridad...no hay una persona concreta del Ayuntamiento que determina la hora, y la forma en la que se ejecuta la plantà, lo*

determina el Ayuntamiento de forma coordinada con los quintos, la tradición establece que después de comer, van a cortar el chopo, lo llevan a hombros hasta el pueblo, lo pelan y finalmente lo plantan...la celebración de este año no ha diferido en nada de la realizada en años anteriores”.

La acusación particular interesa la condena de F.J.S.M. por su condición de Alcalde del Consistorio, entendiendo que debía recaer plena responsabilidad personal por los hechos enjuiciados, si bien alude, (no sin razón), lo que queda al margen de la responsabilidad de los acusados, a la falta de pericia de la Guardia Civil en la diligencia de inspección ocular, y los desencuentros puestos de manifiesto en las declaraciones sumariales y lo manifestado en el juicio oral, donde la competencia sobre la elaboración de un atestado preciso sobre los hechos, dimensiones del chopo, causa probable del accidente, se las atribuyen los miembros de la policía judicial de Villena, a los miembros de la Guardia Civil de Alcoy, y a la inversa, sin que efectivamente exista un atestado donde quede reflejado, siquiera como hipótesis probable, la causa del accidente, que no se investigó por ninguno de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que intervinieron en los hechos, ofreciendo versiones contradictorias sobre la hora de la intervención, lugar exacto y posición del fallecido, identificación del elemento que causó el golpe, iluminación existente en la plaza, si era provisional o permanente, si en el momento de su intervención los focos estaban encendidos o no, o si la plaza se encontraba iluminada; estado del calzado del fallecido, y del tramo del suelo donde se estaba realizando el izado del chopo, base de las tijeras, etc. Y con todos estos argumentos, la acusación particular, atribuye la responsabilidad penal al Sr. F.J.S.M., única y exclusivamente por su condición de Alcalde y para ello, la defensa letrada de la acusación, en fase de informe alude a diversa normativa administrativa como incumplida, normativa que queda a extramuros de la responsabilidad penal objeto de este proceso, sin que dicha parte instara expediente administrativo alguno para solicitar la responsabilidad patrimonial de la administración, por mal funcionamiento del servicio público, o porque entendiera que en este caso concreto resultaba de aplicación la Ley Valenciana de Espectáculos Públicos, y que resultara administrativamente incumplida.

Pues bien, en cuanto a la aludida Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, el capítulo IV se ocupa de los espectáculos y actividades extraordinarios, singulares o excepcionales, distinguiendo entre los que no implican situación de riesgo y los que sí lo entrañan. Para los primeros bastará con una declaración responsable para su realización, requiriéndose, para los citados en segundo término, una autorización administrativa, siendo que el artículo 8 hace responsable de la autorización de tales actividades a sus órganos con atribuciones en materia de espectáculos públicos, actividades socioculturales, responsabilidad que en este caso recaía en el CONCEJAL DE FIESTAS, Sr. V.M.C.P., como responsable de las actividades socioculturales que se realicen en el municipio con motivo de la celebración de las fiestas locales y/o patronales, así como para la realización de ciclos de especial interés cultural o turístico, requieran o no la utilización de vía pública, siendo que el incumplimiento de lo dispuesto en la citada ley autonómica conllevará en todo caso sanciones administrativas, pero no penales que son objeto de este proceso, sin que conste que se haya solicitado responsabilidad administrativa alguna al Ayuntamiento como consecuencia de estos hechos, o que como disponía el texto vigente en el momento de los hechos de la citada Ley, la fiesta de la Planta del Xop fuera acordada por el Consell competente en la materia de espectáculos, declarado de interés general, y que se exigiera que se respetara la normativa vigente en materia de seguridad, así como los demás requisitos y condiciones que aseguren una adecuada solidez y protección para personas y bienes, que en este caso concreto no se habían acordado nunca ni requerido por la administración autonómica para esta festividad concreta, del mismo modo que tampoco se exigía, como se hace en la Disposición Cuarta de dicha Ley (referida a la *festivitat dels bous al carrer*), que las personas que participen en esa fiesta tuvieran condiciones físicas y psíquicas determinadas, y en caso contrario se fijara la asunción de responsabilidades por su comportamiento que se derivase respecto del mismo.

Igualmente, la acusación particular confunde el término “espectáculo” definido en la aludida ley, con los hechos que son objeto de enjuiciamiento en este proceso, “una festividad”, pues admitir dicho argumento sería tanto como atribuir igualmente

responsabilidad a otros organismos oficiales ajenos al Ayuntamiento de Planes, como la Diputación, como organismo que subvencionó la edición del tríptico publicitario de la fiesta, o la Conselleria correspondiente de la Generalitat, que no hizo advertencias legales para la celebración de la fiesta, y los requisitos que deberían cumplirse, o conste que la administración autonómica sancionara al Ayuntamiento por incumplimiento de lo establecido en la Ley 14/10; o las autoridades policiales advirtieran en algún momento del peligro o riesgos que se asumían con esta celebración.

Y lo mismo cabe decir sobre el alegado incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, materia atribuida en exclusiva a la vía administrativa y agotada ésta a la jurisdicción contencioso-administrativa, que no ha sido utilizada por la acusación particular.

Por lo demás, la defensa atribuye la responsabilidad de F.J.S.M. por el cargo que ostenta como Alcalde, pero no fundamenta en modo alguno la responsabilidad penal que se le imputa al mismo, haciéndole incluso responsable de que se permitiera a los jóvenes que bebieran y no se controlara, pero negando rotundamente que XXXXXXXXXXXXXXXX hubiera ingerido una cantidad de bebidas alcohólicas que le afectaran para su participación como primerizo en la fiesta. Y entre las atribuciones del Alcalde, a las que alude la acusación, regulado en el artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local, no se incluyen las que se atribuyen al Sr. F.J.S.M, a quien la acusación reitera que por el tiempo transcurrido, o por no haberse sentido arropado por el Ayuntamiento con la desgracia sufrida, quieren su inhabilitación de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Código Penal; y se solicita en fase de conclusiones definitivas, pese a que los padres de XXXXXXXXXXXXXXXX se personaron como perjudicados en fecha 15 de junio de 2012 (folio 37 y siguientes del Tomo I), y en su escrito de fecha 20 de julio de 2012 interesaban la declaración del Alcalde, Sr. F.J.S.M., en calidad de testigo.

Y consta en autos (folio 60, Tomo I), Decreto N° 47/2011, publicado en el BOP N° 140 de fecha 25 de julio de 2011, sobre la Delegación del Alcalde a Concejales, y en el que se recoge literalmente: *“Tras las elecciones locales del pasado día 22 de mayo de 2011 y constituida la Corporación en sesión extraordinaria el día 11 de junio de 2011. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y art. 125 y 38 d) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO: 1) Efectuar las siguientes delegaciones, respecto de los servicios municipales que se especifican, a favor de los Concejales que a continuación se indican: Servicio Municipal, Concejales Delegados...Deportes, FIESTAS, cementerio y caminos rurales- D. V.M.C.P...2) Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de DIRECCION, ORGANIZACIÓN INTERNA Y GESTION DE LOS CORRESPONDIENTES SERVICIOS, con exclusión de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a tercero..”*. Por tanto, dentro de dicha delegación de facultades, la competencia en la organización y gestión de la fiesta correspondía al Concejal nombrado, el acusado Sr. V.M.C.P., si bien cualquier presupuesto o pago que afectara a los presupuestos del Consistorio correspondía al Alcalde.

Tratándose de una fiesta con tan larga tradición, y sin ningún suceso traumático como el que se produjo en 2012 con la desgraciada pérdida del visitante XXXXXXXXXXXXXXXX, jamás se advirtió por ningún órgano de la administración central, autonómica o local, u otras entidades públicas vinculadas o de las que depende, o cualesquiera de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de las limitaciones, prevenciones o medidas de seguridad para la celebración de la festividad en la forma en que la misma se venía celebrando (dimensiones del chopo, la hondada de la que debía provenir, distancia del pueblo, forma de transporte del mismo hasta la plaza, personas que podían o no intervenir, quien debía dirigir las operaciones, medidas de seguridad propias que debían adoptar los participantes, etc.).

Los acusados y testigos, sin excepción, han explicado que se trata de una fiesta ancestral con muchos años de tradición, donde jamás se consideró, ni por los habitantes del pueblo o por las autoridades policiales u organismos oficiales, tanto de la administración local como autonómica la adopción de más medidas de seguridad que las utilizadas hasta entonces, sin que conste que en la tradición de tantos años

jamás hubiera accidente alguno que hiciera modificar la forma de celebrar la festividad, reconociendo todos los testigos que depusieron en el plenario (incluso el íntimo amigo de XXXXXXXXXXXXXXXX que le invitó a acudir a la fiesta), que nunca fueron conscientes del peligro que representaba participar en la Plantà del Xop, siendo que una vez producido el fatal accidente cuando percibieron los riesgos que entrañaba, y pese a que jamás hubo ningún accidente, años antes del accidente de XXXXXXXXXXXXXXXX, decidieron que se incorporara una tercera tijera (a las dos que se venían utilizando), con la finalidad de que se distribuyeran mejor las personas y con ello la fuerza para colaborar en el izado, y si bien la festividad entraba dentro de la partida presupuestaria para las actividades festivas de la localidad, la propuesta de gasto y actividades que debían realizarse y medidas que debían adoptarse para su celebración, eran competencia del concejal nombrado con tales fines, y la del Alcalde la aprobación del gasto presupuestario.

Y las especiales circunstancias de este caso concreto, como otras muchas casuísticas que se vienen produciendo en los años que corren, en el concepto que hemos acuñado en los últimos años de “sociedad del riesgo”, habiéndose promulgado numerosas leyes de carácter administrativo reguladoras de medidas de seguridad necesarias a nuevas actividades que se crean, acorde a la vorágine de los últimos tiempos, legislando a toda prisa situaciones producidas que no se habían contemplado antes, como es previsible sucederá en el caso presente, siendo por tanto durante todos los años anteriores al fatal accidente, la actividad de la plantà un riesgo siquiera contemplado; y si alguien lo contemplaba, igualmente lo asumía, siendo un riesgo socialmente admitido, y cada persona de forma individual decidía voluntariamente si quería o no participar en la fiesta tradicional de todo un pueblo, que quería celebrarla.

Sin perjuicio que la costumbre del lugar se haya mantenido durante años, se ha revelado en un caso como el presente, que las tradiciones ancestrales tienen también que adaptarse a la realidad actual que vivimos; y en este caso, si bien es cierto que se pudo reglamentar el funcionamiento de la festividad, fijar un plan de prevención de riesgos y adoptar medidas de seguridad tanto para los participantes como para los asistentes, lo cierto es que tal previsión quizás no se produjo porque jamás había ocurrido un accidente como el que desgraciadamente tuvo lugar el 19 de mayo de

2012, sin que pese a la documental obrante en autos, y testificales practicadas, se haya podido determinar cual fue la verdadera razón por la que las tijeras y el árbol cedieron y cayeron. Y en el caso analizado, la presencia de una ambulancia, de protección civil o de la Guardia Civil en el momento de los hechos, no hubiera cambiado el resultado producido, y siquiera se ha podido precisar si un soporte de goma a los pies de las tijeras hubiera evitado el accidente, por desconocer si lo que venció fue la fuerza de los participantes, el estado de las vigas o las dimensiones del chopo sobre las que jamás se planteó reglamentar, el calzado de los participantes, el número de personas que participaban en el izado, etc.

Condenar al Alcalde en este caso, sería tanto como condenar a todo el pueblo por la inconsciencia de participar en una fiesta que carece de medidas de seguridad que nunca han querido los habitantes de Planes, porque ello hubiera supuesto desnaturalizar el motivo de su celebración, condena que en la práctica ya se ha producido, dado que desde el año 2012 y con motivo de estos hechos la festividad no ha vuelto a celebrarse, siendo que si bien se carecía de medidas de seguridad específicas, la organización y puesta en marcha de la festividad debería haberse llevado a cabo con una mínima diligencia o interés por parte del responsable de la festividad, el Concejal de Fiestas, el acusado Sr. V.M.C.P., siendo que, en todo caso la condena penal no cerrará un duelo que perdurará para siempre, no solo para los padres de XXXXXXXXXXXXXXXX, sino para todo el pueblo, tal y como explicó el Sr. F.J.S.M. ejercitando su derecho a la última palabra, dirigiéndose a los padres de XXXXXXXXXXXXXXXX, y manifestándoles literalmente que: *“Se dirige a la familia y especialmente a la madre, para trasladarles de nuevo el profundo dolor, pesar y tristeza de todo el pueblo y el suyo propio, y manifestarle que mientras que de él dependa, no se volverá a celebrar la fiesta del Xop en el pueblo”*.

Por todas las razones expuestas, procede absolver a F.J.S.M. del delito de homicidio por imprudencia del que venía siendo acusado.

SÉPTIMO.- Distinta suerte debe correr sin embargo, la acusación formulada frente al Sr. V.M.C.P., subrayándose en primer término la ausencia de una explicación lógica y/o alternativa con un mínimo de solidez para justificar su versión, mostrándose incluso

indiferente ante los hechos, sin ofrecer argumento alguno por entender que estaba exento de cualquier responsabilidad en lo relativo a la organización y funcionamiento de la festividad de la Plantà del Xop, pese a ostentar el cargo de Concejal de Fiestas, y su indiferencia ante lo acontecido, debe operar como dato corroborador de la veracidad de la acusación formulada, de acuerdo con reiterada doctrina del Tribunal Constitucional que recuerda que *"la futilidad del relato alternativo del acusado, si bien es cierto que no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo, so pena de asumir el riesgo de invertir la carga de la prueba, sí puede servir como elemento de corroboración de los indicios a partir de los cuales inferir la culpabilidad, (SSTC nº 220/1998 de 16-11, nº 155/2002 de 22-7 o nº 135/2003 de 30-6)."*

Y no puede servir de excusa para justificar la ausencia de un relato coherente o no contradictorio la afirmación de su defensa letrada relativa a que se trata de un pueblo pequeño, con muy pocos habitantes, (alrededor de 600), que el Sr. V.M.C.P. no percibía remuneración alguna por su cargo, y que es un hombre que ha trabajado toda su vida en el campo, que carece de estudios y que su único cometido era la asistencia a los Plenos del Ayuntamiento, que se producen 3 o 4 veces al año. Y si bien su testimonio ha resultado coincidente con el Sr. F.J.S.P. en lo relativo a la supervisión de la fiesta: *"... no hay ningún miembro del Ayuntamiento que en calidad de tal, supervise o coordine la plantà, porque esa función siempre se ha llevado a cabo, y se sigue ejerciendo por los vecinos...que el material que se utiliza todos los años para la plantà, como las tijeras se guardan todos los años en un local del Ayuntamiento...la revisión del material la realizan dos empleados del Ayuntamiento.....nunca se ha elaborado un plan de prevención de los riesgos de la plantà por la Comisión de Fiestas, porque se ha hecho de forma consuetudinaria y tradicional, por los vecinos y quintos del pueblo"*, el cargo de concejal, y por tanto con la tarea encomendada de la gestión en su ámbito de competencia para el que fue nombrado, LO 5/85 de 19 de junio, de Régimen Electoral General, con los deberes y obligaciones del cargo, que se regulan básicamente en el artículo 73.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, así como en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 25689/1986 de 28 de noviembre. Y conforme a dicha normativa, el cargo de V.M.C.P., como Concejal de Deportes, Fiestas, cementerio y caminos rurales, fue publicado en el BOP de 25 de julio de 2011, nº 140, en virtud del Decreto Nº 46/2011 del Ayuntamiento de Planes.

Y si bien los testigos y los propios acusados han afirmado que se trata de una fiesta que organizan en su mayor parte los quintos, es el Ayuntamiento el encargado de que haya un grupo de danzas; es tarea del Ayuntamiento igualmente que para tal evento se corten las calles, se contrate una orquesta, se coloque una tarima; las tijeras y las cuerdas para su izado final son facilitadas también por el Ayuntamiento, quien las tiene todo el año depositadas en un almacén municipal, se deben solicitar presupuestos para la contratación de focos para iluminación de escenario y plaza, tareas todas ellas, que deben ser conocidas, ordenadas y supervisadas por el responsable del Ayuntamiento nombrado específicamente para las actividades festivas de la población de Planes, tarea que recaía específicamente en el Concejal de Fiestas, el acusado Sr. V.M.C.P., sin perjuicio de que el Alcalde fuera el responsable de la gestión económica, aprobación y orden de pago de presupuestos y facturas relativas a dichas actividades específicamente encomendadas al Concejal de Fiestas, quien por otra parte, en su declaración en el plenario mostró una ignorancia y desinterés al cargo que ostentaba, *escudándose en que se pedía un presupuesto por el administrativo, todo se hablaba, o si había algo como trabaja en el campo le llamaban...* Y si bien no se ha probado, aunque sí planteado como hipótesis, el estado de la base de los troncos que formaban las tijeras, la comprobación y puesta a punto, tanto de éstas como de las cuerdas que suministra a los vecinos el Ayuntamiento, debían ser revisadas, corriendo a cargo del concejal la obligación de dar las órdenes oportunas a los operarios que correspondiera realizar dichas tareas, evidenciándose por tanto por parte del acusado Sr. V.M.C.P. la omisión de las más elementales normas de cuidado, propias del cargo que ostentaba siendo el responsable de la organización y buen funcionamiento de la festividad de la Plantà del Xop, quedando probado a la vista de la prueba practicada y ampliamente analizada y reproducida, que el acusado Sr. V.M.C.P. omitió las actividades y diligencias necesarias y propias de su cargo, lo que coadyuvó a elevar el riesgo de la festividad, lo que debe conllevar la condena del acusado V.M.C.P. por los hechos objeto de enjuiciamiento.

OCTAVO.- Acreditada la realidad del evento accidental, como causa del fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX, procede estudiar el encaje penal de los hechos.

Se debe partir de la base de que nos encontramos ante una sola acción (caída del tronco y/o árbol) y un solo resultado (muerte). No ha sido un hecho controvertido que se trata de una festividad de origen ancestral, consistente en introducir un chopo en un hueco construido al efecto en la plaza del pueblo de Planes, por el que se ha venido celebrando durante años inmemoriales la fiesta de la fertilidad de la tierra, siendo una fiesta popular, de los jóvenes de la población que celebran su mayoría de edad, e invitan a familiares y amigos a su participación, organizada anualmente en las fechas concretas fijada de común acuerdo entre los vecinos y el Ayuntamiento, donde los jóvenes tras buscar varias formas de recaudar dinero durante el año, y si no obtenían suficiente recaudación, algún año con alguna aportación por parte del Ayuntamiento, ofrecían de forma gratuita una comida de fraternidad a todos los asistentes, y en el caso de autos, el finado tras la comida, acudió en compañía de unos amigos a la zona forestal donde se encontraba el chopo que los quintos habían elegido días antes, y que en prueba de su fertilidad, fortaleza y hombría intentaban que se tratara del chopo con el mayor diámetro y altura posible; y el chopo objeto de autos, tras ser talado el 19.5.2012 después de la comida, fue muy difícil de trasladar desde la zona de bosque angosta en la que se encontraba, sin que se haya puesto en duda, pese a la falta de prueba documental al respecto, que participara una retroexcavadora y un tractor para desplazar el tronco hasta la carretera, o que interviniera alguna máquina adicional, si bien si que ha sido controvertido si las técnicas que se tuvieron que utilizar para el desplazamiento del chopo, o la distancia que separaba el bosque forestal en que se encontraba hasta su desplazamiento a la plaza del pueblo, supuso un retraso en la hora habitual de la plantà de los años anteriores, o que participaran menos personas en el traslado a hombros hasta la plaza del pueblo, siendo igualmente controvertido por las contradicciones existentes entre los diferentes testigos que depusieron, si en el momento de la plantà la plaza se encontraba suficientemente iluminada (al respecto obra al folio 5 del tomo II factura de contratación de grupo electrógeno para el día 19 de mayo de 2012), siendo éste uno más de los elementos de riesgo asumidos el día de los hechos que pudo condicionar el imprevisto y fatídico accidente, evidenciándose la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento y directa de su aseguradora, al ser el primero el encargado de construir, custodiar y revisar las tijeras y cuerdas, depositadas en un almacén municipal, de donde los quintos las retiraban, siendo igualmente que el Ayuntamiento permitía la celebración del evento mediante la contratación de grupos

electrógenos, la organización de las charangas y/o orquestas; y en cuanto a las dimensiones concretas del árbol de la fiesta de la plantà de 2012, ha existido versiones contradictorias entre los testigos que depusieron en el juicio oral sobre si el árbol elegido ese año era similar al de los anteriores, o justo ese año destacó más por su especial altura y diámetro, circunstancia que no consta reflejada en el informe de inspección ocular realizado por la policía judicial; o que ese año hubieran menos participantes en el izado del árbol, al no coincidir tampoco los testigos en si por tijera habían 10, 20 o 30 personas; a dicha falta de prueba se debe unir el hecho no controvertido a quien ninguno de los testigos supo dar respuesta sobre cuál fue la verdadera causa del accidente, y a que el finado XXXXXXXXXXXXXXXX era la primera vez que acudía a la fiesta, invitado por un amigo, no quedando igualmente clarificada la hora en la que habitualmente se suele hacer la plantà, pero que en todo caso en el año 2012 fue alrededor de las 21:30 horas, que es la certificada como la hora de fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX; no hubo testigo que aclarara igualmente quien era la persona/s concretas que ese año coordinaba los esfuerzos de todos, dando las instrucciones necesarias para saber en que momento se debía dar impulso a cada una de las tijeras, siendo además prueba de ello que cuando se vio caer una de las tijeras, todo el mucho echó a correr, situaciones todas estas, que pese a la tradición, costumbres y falta de reglamentación, no se sabe cuál debió ser la mínima diligencia debida en este caso para que el accidente hubiera podido evitarse, y se trata de analizar el alcance de la antijuricidad de los hechos, y del material probatorio existente se puede considerar que se reúnen en este caso los elementos típicos que el ordenamiento jurídico exige para el delito imprudente, y la atribución de los mismos al acusado Sr. V.M.C.P.

En relación al reiteradamente aludido por las defensas, *riesgo socialmente permitido*, también denominado por la doctrina, “riesgo autorizado”, “riesgo tolerado”, “riesgo adecuado”, o “riesgo consentido”, no resulta pacífica la determinación de la ubicación sistemática en el concepto de delito, del mismo modo que no existe consenso acerca de su naturaleza jurídica; el origen del concepto de riesgo permitido surge en la jurisprudencia alemana, en la segunda mitad del siglo XIX debido a las lesiones y muertes producidas en el ámbito de la industria; en líneas generales se entiende que quién actúa dentro del riesgo permitido no incurre en el tipo del delito imprudente,

pues se excluye el primer elemento del tipo objetivo, es decir, la inobservancia del cuidado objetivamente debido, cuando no existen disposiciones penales, reglamentarias, administrativas o equivalentes que permitan delimitar el ámbito permitido en actividades de riesgo, por lo que deberá acudirse a las reglas generales previstas para situaciones arquetípicas basadas en la experiencia y el razonamiento; y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido evolucionando en función de las nuevas demandas sociales y a la luz del escueto contenido del artículo 1902 CC, que establece que *“el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”*, más orientada en los últimos años al criterio de la imputación por *“culpa”*, alejándose de los criterios objetivos, así a título de ejemplo se han considerado en algunas ocasiones como susceptibles de ser englobadas bajo la rúbrica del riesgo permitido aquellas acciones u omisiones peligrosas o lesivas que cuentan con el consentimiento en dicho riesgo de parte del sujeto pasivo afectado, si bien es necesario determinar el objeto sobre el que recae el consentimiento, entendiendo la jurisprudencia alemana que si se está de acuerdo con el peligro de una acción, debe aceptarse también las consecuencias directas de la misma, cuestión que no es tampoco pacífica en nuestra jurisprudencia.

Los criterios jurídicos que existen para efectuar legítimamente la imputación, la doctrina la clasifica en dos criterios, para atribuir a un sujeto distinto de la víctima el daño sufrido por ésta: la culpa, a la que se acompaña la negligencia y el criterio de la actividad desplegada, siendo la culpa o negligencia el criterio de imputación utilizado de forma genérica y natural en todos los sistemas jurídicos de responsabilidad civil, reproducido en nuestro código civil en el artículo 1902 (con igual contenido en el artículo 1382 del Código Civil francés y en el artículo 2043 del Código Civil italiano); lo que significa, en síntesis, que la ley obliga a una persona a asumir el daño causado a otra, porque la actuación del primero no se ajustaba a los estándares de conducta aceptados en el ámbito en el que se ha producido el daño, y en consecuencia, no debe ser soportada por la víctima. Es decir, por el criterio objetivo se imputa a una persona el daño que produzca la actividad desarrollada, con independencia del nivel de contribución del investigado en la producción del daño, y en la diligencia desplegada, y el ejemplo más claro en los actuales sistemas de responsabilidad lo constituye el daño causado por la conducción de vehículos a motor.

Y siendo esta juzgadora conocedora de la postura del Tribunal Supremo en la mayor parte de los casos en los que se ha rechazado la responsabilidad objetiva o *strict liability* en actividades deportivas, atribuyendo a las víctimas la responsabilidad por el riesgo voluntariamente asumido, y peligro sobradamente conocido por la víctima (actividades de rafting, esquí, parapente, etc.), en otro tipo de actividades el Tribunal Supremo ha venido estimando la responsabilidad por omisión de las medidas de vigilancia, mantenimiento, señalización, cuidado o precaución que debían considerarse exigibles, siendo algunos ejemplos de ello, la caída en una escalera por no existir pasamanos (STS 21.12.1997); la caída en las escaleras de un gimnasio que no se encontraban en adecuadas condiciones (STS 10.12.2004); la caída en una zona recién fregada y no bien delimitada (STS 20.06.2003), lo que equivale a que es la propia negligencia la que se utiliza como criterio de imputación, no el riesgo.

Ahondando en lo anterior, la STS de 4-7-2003 expresa que: "*en los delitos de resultado para solucionar los problemas de la llamada relación de causalidad, la doctrina actual acude al concepto de imputación objetiva, entendiendo que hay relación de causalidad siempre que la conducta activa u omisiva del acusado se pueda considerar como condición sin la cual el resultado no se habría producido conforme a la tradicional doctrina de la equivalencia de condiciones o "conditio sine qua non", relación que se establece conforme a criterios naturales que proporcionan las reglas de la ciencia o de la experiencia, estableciéndose después, mediante un juicio de valor, las necesarias restricciones acudiendo a la llamada imputación objetiva, que existe cuando el sujeto, cuya responsabilidad se examina, con su comportamiento origina un riesgo no permitido, o aumenta ilícitamente un riesgo permitido y es precisamente en el ámbito de ese riesgo donde el resultado se produce, entendiéndose que no se ha rebasado ese ámbito cuando dicho resultado se estima como una consecuencia normal o adecuada conforme a un juicio de previsibilidad o probabilidad, porque debe estimarse que normalmente ese concreto resultado se corresponde con esa determinada acción u omisión, sin que pueda achacarse a otra causa diferente, imprevisible o ajena al comportamiento del acusado (sentencias de esta Sala de 20-5-81 (RJ 1981, 2247) , 5-4-83 (RJ 1983, 2242) , 1-7-91 (RJ 1991, 5485) y más recientemente la de 19-1º-2000 (RJ 2000,92623)). Cuando se producen causas causales complejas, esto es, cuando*

contribuyen a un resultado típico la conducta del acusado y, además, otra u otras causas atribuibles a persona distinta o a un suceso fortuito, suele estimarse que si esta última concausa existía con anterioridad a la conducta del acusado, como pudiese ser una determinada enfermedad de la víctima, ello no interfiere la posibilidad de la imputación objetiva, y, si es posterior, puede impedir tal imputación cuando esta causa sobrevenida sea algo totalmente anómalo, imprevisible y extraño al comportamiento del inculpado, como sucedería en caso de accidente de tráfico ocurrido al trasladar en ambulancia a la víctima de un evento anterior, pero no en aquellos supuestos en que el suceso posterior se encuentra dentro de la misma esfera del riesgo creado o aumentado por el propio acusado con su comportamiento."

Aclarado lo anterior, nos encontramos ante un delito de homicidio por imprudencia que la acusación particular y el Ministerio Fiscal califican de grave, si bien el Ministerio Fiscal de forma subsidiaria lo calificó de imprudencia menos grave, sin embargo, no puede asumirse la calificación de la acusación particular, si bien el resultado (fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX) le es imputable al acusado.

La STS de 14-1-2016 recoge literalmente que "*...en la STS 1089/2009, se decía que el delito imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado. A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la*

certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal".

Y sobre la diferenciación entre la imprudencia grave y la que no lo es, se decía en la STS 1823/2002 que la imprudencia grave: *"...ha requerido siempre la vulneración de las más elementales normas de cautela o diligencia exigibles en una determinada actividad"*, y con parecidos términos se recordaba en la STS 537/2005, que *"la jurisprudencia de esta Sala suele considerar grave la imprudencia cuando se han infringido deberes elementales que se pueden exigir al menos diligente de los sujetos. Es temeraria, se ha dicho reiteradamente, cuando supone «un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado».* Estas consideraciones *adquieren especial relieve cuando la situación de riesgo creado con el comportamiento imprudente afecta a bienes de primer interés, como es la vida de las personas, y cuando se está creando un peligro elevado para dichos bienes sin la adopción de las necesarias medidas de cuidado y control"*.

De esta manera, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para distinguir la imprudencia grave de la leve ha subrayado que debe atenderse a la mayor o menor falta de diligencia mostrada en la acción u omisión, la mayor o menor previsibilidad del evento que sea el resultado, a la mayor o menor gravedad de la infracción del deber de cuidado que según las normas socio culturales, de la gente se espera. La imprudencia leve existe cuando el agente ha omitido la diligencia media acostumbrada en una esfera especial de actividad, o se omiten normas de cuidado que por no ser inexcusables o aconsejables por la más vulgar prudencia, solo pueden exigirse en determinados casos.

En dicha valoración, la STS 966/2003 de 4 de julio, advierte que: *"dado que no hay módulos legales que sirvan para medir la intensidad de la imprudencia a los efectos de calificarla como grave o leve, hay que estar a las circunstancias del caso concreto, estableciendo como criterios a tener en cuenta la mayor o menor intensidad o importancia del deber de cuidado infringido, que es el criterio fundamental aunque también demasiado genérico, y la previsibilidad del resultado, elemento, por otra parte, inherente al mismo concepto de deber de cuidado, ya que sólo lo que es resultado previsible puede servir para afirmar que alguien ha omitido el deber de cuidado."*

En esta línea, la STS 598/2013 de 28 de junio mantiene que la gravedad de la imprudencia se determina desde una perspectiva objetiva o externa y subjetiva o interna:

1º. Perspectiva objetiva o externa: que supone la determinación de la gravedad con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor directamente vinculada con:

a) El grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado o con el grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos derivados de la conducta de terceras personas o de circunstancias meramente casuales.

b) El grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo).

c) La importancia o valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: a mayor valor, menor el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado.

2º. Perspectiva subjetiva o interna (deber subjetivo de cuidado): la gravedad se determina por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo: a mayor previsibilidad, mayor nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave la vulneración.

Y no se puede obviar que en este caso, se trata de una administración pública, un Ayuntamiento, frente al que no se inició expediente administrativo de responsabilidad patrimonial por mal servicio de la administración, debiendo hacer alusión, siquiera de forma superficial de lo que exige la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, y ciñéndonos a su regulación fue el concejal de fiestas, el Sr. V.M.C.P. el responsable de coordinar el evento, dado que formaba parte de su competencia exclusiva del cargo, al margen de que fuera el órgano de gobierno quien aprobara los presupuestos que el concejal debía proponer para destinar fondos a la festividad objeto de su exclusivo mandato, evidenciándose con las diferentes declaraciones prestadas y en particular, la ofrecida en el plenario que es donde se despliega la auténtica actividad probatoria, que hubo una dejación total de funciones por parte del concejal de fiestas señor V.M.C.P., funciones exclusivas de su cargo existiendo una omisión voluntaria no maliciosa, desinteresándose totalmente de la organización de la fiesta para evitar posibles riesgos (chopo elegido, quintos de ese año, participantes en el izado, estado de las tijeras y cuerdas, iluminación en la plaza para la plantà, disposición de las vallas para el corte del tráfico y acceso de personas, etc.), revelándose por tanto la conducta del concejal de fiestas adecuada para producir el resultado dañoso que se produjo.

NOVENO.- Aplicada la jurisprudencia analizada en los fundamentos anteriores, al caso de autos, procede considerar al acusado **V.M.C.P.** autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave del art.142.2 del Código Penal, introducido en el Código Penal con la reforma por LO 1/2015, que tipifica la distinción entre imprudencia "grave" y "menos grave" al tiempo que despenaliza la imprudencia "leve"; concretamente, el apdo.1º castiga al que *"por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años."* y el apdo. 2º castiga al que *"por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses"*.

Según se expone en el Preámbulo de la referida L.O. 1/2015 el legislador considera que dentro de las imprudencias que se considera que constituyen conductas merecedoras de reproche penal se establece una modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave; esto es, con la calificación de menos grave no se refiere al límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que el

legislador ha querido expresamente despenalizar, sino que debe considerarse que, dentro de la imprudencia menos grave se encuentran supuestos que antes se englobaban en la imprudencia grave pero que, por la menor importancia y relevancia del deber de cuidado infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la Jurisprudencia para ello, y a los que con anterioridad se ha hecho referencia, pueden ser considerados como menos graves. Esto es, todos los supuestos considerados como imprudencia grave hasta la reforma dada por la LO 1/2015 (la distinción era solo entre leve y grave) ahora han de ser valorados como graves o menos graves (las leves son atípicas), criterio ya seguido por la SAP de Cádiz de 23-3-2017; también un sector de la doctrina ha venido a identificar la imprudencia menos grave como un tipo de imprudencia intermedia más intensa que la leve anterior, por lo que se desgajaría esta última, nutriéndose de supuestos más graves y sin detraer ninguno de la imprudencia grave; otro sector de la doctrina, sin embargo, la nueva imprudencia menos grave se desgajaría de la grave, alimentándose de sus conductas más leves, con las consiguientes repercusiones en el derecho transitorio centradas en la posibilidad de aplicación retroactiva de la nueva categoría como más beneficiosa (de conformidad con el artículo 2.2 del Código Penal y la Disposición Transitoria 1ª de la LO 1/2015), y así concebidas la imprudencia grave y menos grave, y atendiendo, no a la gravedad del resultado de la conducta imprudente, sino a la gravedad con que ha sido infringida la norma de cuidado, en el supuesto aquí enjuiciado, los hechos probados permiten la calificación planteada de forma subsidiaria por el Ministerio Fiscal.

Y en relación a los supuestos acontecidos en los que se pueda exigir responsabilidad a los dirigentes políticos, como en el caso presente, no pasa desapercibido la utilización del derecho penal para conseguir fines que no responden a efectivas necesidades de política criminal, sino de control de los órganos de gobierno o como recurso para obtener una proyección pública que facilite la obtención de una respuesta acorde a las opiniones de la sociedad.

Lógicamente, en la valoración de la imprudencia como grave o menos grave se ha de atender a los parámetros jurisprudenciales analizados anteriormente; tal y como recoge la STS de 29-2-2012 "*ante la falta de determinación en nuestro derecho positivo de módulos legales para la mensuración del grado o clase de culpa, el órgano judicial*

ha de proceder, con ponderación y prudencia a su medida y delimitación, tomando en consideración las circunstancias fácticas de todo orden, subjetivas y objetivas, concurrentes en el supuesto enjuiciado, conjugando tanto los elementos internos de la previsibilidad y de la diligencia con base en el intelecto y en la voluntad, como los externos que fijan la acomodación que han de tener las conductas humanas del grupo del que forma parte el agente, no olvidando que para dicha delimitación no se puede seguir simplemente el criterio de la mayor o menor intensidad de la previsión ("factor psicológico") o el de la diferente omisión del deber que exige la convivencia humana ("factor normativo"), ya que casos de culpa consciente pueden no ser temerarios si la diligencia se extrema en grado sumo y, asimismo, supuestos en los que se da la falta de la más elemental diligencia no pueden alcanzar el grado de temeridad porque circunstancias concurrentes a la acción reducen la previsibilidad a un grado menor del que podría contemplarse de no entrar en juego dichas circunstancias."

Entrando a valorar los requisitos del homicidio imprudente, el núcleo para lo que es objeto de análisis en este caso concreto, está constituido por la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que objetivamente era necesario observar; cabe destacar entre los requisitos genéricos mencionados por la jurisprudencia la existencia de un elemento normativo constituido por la infracción del deber objetivo de cuidado normalmente exigido por el ordenamiento jurídico, por las costumbres o por las reglas de convivencia social; y que el tipo objetivo está integrado, por un lado, por una acción u omisión cuyo valor radica en la infracción de una norma social de cuidado que obliga, bien a advertir el riesgo que se crea con la acción-omisión bien a evitar que el riesgo se concrete en una efectiva lesión, y de otro por un resultado susceptible de ser subsumido en un tipo delictivo que admita, en virtud de una norma legal la forma culposa.

El delito imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión) obliga advertir la presencia de un peligro cognoscible, y el índice de su gravedad; y de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos o, en su caso, actuar de modo que se controle o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre

que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado y el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por él que se materialicen en el resultado (vínculo normativo o axiológico) y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, el menoscabo del bien jurídico de tutela la norma penal (STS 88/10, 19.1). En cuanto al elemento normativo se debe subrayar que al autor se le exige comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos o, en su caso, actuar de modo que se controlen o neutralicen riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor siempre que el deber de garante de éste le obligué a controlar neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado (STS 1089/09-27-10 O 225/14 de 5-3); y el deber de advertir el peligro es la exigencia previa a la vulneración del deber de cuidado (STS 535/99 de 26-3).

La sustancia de la culpa tiene hoy un contenido especialmente normativo, por cuanto implica la infracción de un deber de cuidado que se impone a las personas en su comportamiento o conducta social, infracción de las normas que deben ser observadas por una persona media, alcanzados planos fundamentales de referencia, la peligrosidad de la conducta en sí misma considerada, y la valoración social del riesgo creado teniendo en cuenta las normas socioculturales (STS 720/03 de 21-5); y la jurisprudencia también ha incorporado el concepto de vulneración de una norma sociocultural, que se refiere a la transgresión de una norma sociocultural que está demandando la actuación de una forma determinada, para la protección de bienes social o individualmente valorados y qué es la base de la antijuridicidad de la conducta imprudente (STS 535/99 de 26-3).

Y en el caso de autos, la infracción del deber de diligencia por parte del acusado se conecta con el resultado producido, en el sentido de que se desocupó por completo de sus obligaciones como concejal de Fiestas de la localidad de Planes, no pudiendo tener favorable acogida su argumento de que siempre ha trabajado en el campo y que carece

de estudios, cuándo asumió de forma voluntaria el cargo para el que fue designado; lo que se evidenció igualmente en el plenario, donde el acusado Sr. V.M.C.P., reconoció desconocer cualquier detalle relativo a la festividad de 2012 (si se contrató o no iluminación, horario de la misma, cómo había transcurrido la festividad el día de su celebración, hora de llegada del chopo a la plaza, características del mismo, si ese año el Ayuntamiento realizó alguna aportación para los quintos, las actividades que se organizaron para ese día, si fueron revisados previamente y por quién, las tijeras y cuerdas, zonas de corte del tráfico rodado, acceso de visitantes, etc.); ignorando por tanto, pese a la falta de reglamentación de la festividad, las más elementales normas sociales de cuidado propias de una fiesta con gran tradición y proyección, siendo todos estos elementos concurrentes, acordes con la teoría de la equivalencia de condiciones, que deben conducir a la atribución de la responsabilidad penal solicitada, de forma subsidiaria por el Ministerio Fiscal, calificándola como imprudencia menos grave, pues su conducta fue creadora de un riesgo jurídicamente desaprobado en cuyo marco se ha producido la concreción de un resultado, resultando en todo caso de aplicación esta nueva categoría de imprudencia a hechos anteriores a la reforma de la LO 1/2015, que en realidad ha supuesto un cambio de denominación.

Y valorando las circunstancias concurrentes en el caso analizado, debe subrayarse que aún cuando no existían medidas de seguridad específicas para la festividad, más que las que de antaño se han venido adoptando (tres tijeras, cuerdas en los extremos superiores para finalizar el izado del chopo), resulta obvio que esta actividad, como muchas otras de la vida diaria, suponían un riesgo para los participantes, pese a que los habitantes de Planes, y las autoridades lo percibieran hasta el momento que sucedió el fatídico accidente, y no se puede decir que esa actividad carecía de utilidad social, pues sí que la tenía al ser una fiesta ancestral de referencia para todos los habitantes de la población de Planes, lo que obliga a valorar en este caso específico la graduación de la imprudencia, pues no puede ser el mismo grado de previsibilidad una acción de una actividad puntual, aislada, que una actividad, con riesgo, pero socialmente admitida, aceptada y realizada durante años, lo que reduce la previsibilidad, y en este caso nada impide que con las modificaciones introducidas en la Ley 1/15 de Reforma del Código Penal, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2, se pueda imponer aquellas penas que favorezcan al reo, pues la jurisprudencia, siendo ejemplo de ella la STS 2ª 499/04, de 23-4, señala que deben diferenciarse los casos en que verdaderamente está justificada la retroacción en beneficio del reo porque el legislador ha valorado de modo diferente la conducta antes punible, que, por tal cambio, queda despenalizada, respecto de aquellos otros en que tal despenalización se produce por razones de cambio en las circunstancias del hecho, en que, subsistiendo el criterio del legislador de considerar punible el delito, se habría producido una nueva situación fáctica, al haberse modificado la normativa reguladora de un aspecto fáctico del delito, razones todas ellas que nos deben llevar a considerar al acusado Sr. V.M.C.P., como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave del artículo 142.2 CPn.

DÉCIMO.- Sobre la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, del artículo 21.6 CP solicitada de forma tardía por la defensa de los acusados, quienes inicialmente elevaron sus conclusiones a definitivas y nada refirieron en fase de informe, sino momentos antes de declarar los autos conclusos para sentencia, atenuante sobre la que igualmente no se pronunció el Ministerio Público, en sus conclusiones definitivas, conviene recordar que respecto a la aplicación de esta atenuante, la Jurisprudencia ha advertido que la dilación indebida es un concepto abierto o indeterminado que no se identifica con la duración total del proceso y el

incumplimiento de los plazos procesales, sino que requiere, en cada caso, una específica valoración, acerca de si ha existido efectivo retraso, verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo es injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable consistente en la duración mayor de lo previsible o tolerable (por todas la STS, Sala 2ª de fecha 15-12-17, Sentencia n.º 827/17).

Así también la STS 598/2014 de 23 de julio analiza las notas que perfilan la atenuante de dilaciones indebidas en el nuevo precepto del número 6 del artículo 21 del Código Penal. Así señala que la extraordinariedad en el retraso se configura de naturaleza totalmente empírica y como algo que no cabe un concepto meramente normativo que implique atenuante para toda duración meramente diversa de la duración legalmente prevista para cada trámite. Mientras que la exigencia típica de que la dilación sea indebida debe entenderse en el sentido de injusto e ilícito, es decir, no justificable, para cuya valoración deberá atenderse a las circunstancias concurrentes en cada caso, como por ejemplo, el que tal dilación resulte desproporcionada para la complejidad de la causa.

En cualquier caso es importante resaltar, como lo hace la STS 318/2013, de 11 de Abril, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no puede identificarse con el derecho a ser descubierto con prontitud: *“... la referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla, sin más, la fecha de comisión de los hechos, sino la de la incoación del procedimiento, o siendo más precisos, la de imputación del denunciado. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable, en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud”*.

Conforme a la jurisprudencia del TC (entre otras, SSTC, 54/201, del 10 de abril de 2014 54/2014, de 10 de abril, y 76/2016, de 25 de abril), el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) es un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, por cuanto "no toda infracción de los plazos procesales o toda 'excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental" (STC 153/2005, de 6 de junio). En la STC 178/2007, de 23 de julio,

recogiendo jurisprudencia anterior, subrayaba el TC que la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso.

Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del TEDH sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en "un tiempo razonable"), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, afirmaba que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que la jurisprudencia ha ido precisando (en el mismo sentido, entre otras, SSTEDH, Vallon-gi-Emboria Orthopedikon Eidon y Michanima ton A.E. y Otros c. Grecia, 3 abril de 2014, Sotosek c. Eslovenia; 2 de abril de 2013, Ferreira Alves c.. Portugal; 3 de enero de 2013, Kovinar D.O.O. e. Eslovenia; 4 de diciembre de 2012, Dimitrovi c.Bulgaria; 4 de diciembre de 2012 Silva Goncalves et Neves Dias e. Portugal; 9 de julio de 2012, Jama e. Eslovenia), y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo (por todas, SSTC, 141/2010, de 21 de diciembre; 58/2014, de 5 de mayo; 89/2014, de 9 de junio; 99/2014, de 23 de Junio), el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades.

El TEDH ha concretado que eso que el demandante arriesga en el proceso penal puede ser una pena severa (SSTEDH, de 23 de septiembre de 1998, Portington contra Grecia; 2 de noviembre de 2004, Hensworth c. Reino Unido), pero también el trabajo del acusado (vid. STEDH de 20 de julio 2004, & Eastaway c. Reino Unido; 6 de mayo de 1981, Bucholz c. Alemania); la custodia de los hijos (STEDH de 3 de febrero de 2005, Sylvester c. Austria), el honor o reputación (STEDH, 28 de septiembre de 2004, Pieniazeck c. Austria), etc.

El TEDH ha manifestado asimismo que el propósito de "*la garantía de un plazo razonable*", que se aplica tanto a los casos criminales como al resto de casos no criminales, es la de proteger "a todas las partes involucradas en un Procedimiento judicial... contra los excesivos retrasos judiciales" (Stogmuller v. Austria, de 10 de noviembre de 1969) y ello para "resaltar la importancia de aplicar la justicia sin

retrasos, pues estas tardanzas pueden poner en cuestión la efectividad y credibilidad de la propia justicia" (H. V. France. de 24 de octubre de 1989). También ha dicho el TEDH que *"debe evitarse que un acusado permanezca mucho tiempo en estado de incerteza sobre su destino"* (Stogmuller v. Austria, de 10 de noviembre de 1969).

El art. 21.6 del CP concreta esa doctrina exigiendo, para que pueda apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas, la concurrencia de tres requisitos: a) el carácter extraordinario (relevante) e indebido (no justificada) de la dilación; b) su no atribuibilidad al propio inculpado; y c) la falta de proporción con la complejidad de la causa. Aunque también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante. Esos requisitos no son claves abstractas para resolver sobre la razonabilidad del plazo, sino de pautas para evaluar, una vez el proceso penal ha concluido, si su duración ha sido o no razonable. (Por todos, Autos de TS 20 de abril y 23 de mayo de 2017).

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido fijando el *"dies a quo"* para establecer las dilaciones indebidas en el momento en que acontecieron los hechos (SSTS 18-11-2013 y 19-12-2013), desde la detención de los acusados (STS 13-6-2012), desde la presentación de la denuncia o la querella (SSTS 26-4-2012, 6-6-2012). Y ha señalado el *"dies ad quem"* (en la fecha de presentación por el Ministerio Fiscal de su escrito de acusación (SSTS 29-6-2011), en la de la celebración del juicio oral (SSTS 26-4-2012, 26-6-2012), en la del dictado de la sentencia (SSTS 30-11-2010, 20-5-2011, 12-6-2012, 19-12-2013), o bien ha considerado la duración completa del procedimiento (SSTS 30-9-2011, 25-5-2012, 4-12-2013) o la paralización del proceso en alguna fase del mismo (SSTS 7-6-2010; 27-9-2012).

En aplicación de esa doctrina, y teniendo en cuenta, por tanto, que el fundamento de esta atenuante no está en que haya una disminución del injusto ni de la culpabilidad, sino una especie de compensación parcial al delincuente por haber vulnerado el Estado su derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, debe ser estimada la atenuante alegada, como muy cualificada, dado que la causa estuvo paralizada, sin ninguna tramitación de carácter sustantivo, y sin motivo atribuible a los investigados, y

sin que se aprecie complejidad alguna, con paralizaciones injustificadas durante la instrucción de la causa, siendo que la misma fue incoada en fecha 20 de mayo de 2012 (folios 2 y 3, Tomo I), dictándose auto de procedimiento abreviado en fecha 10.11.14 (folios 169 a 177, Tomo I), presentándose escrito de defensa por la defensa del Sr. V.M.C.P. el 9 de diciembre de 2015, y en la misma fecha por el Ayuntamiento de Planes como Responsable Civil Subsidiario; siendo el escrito de defensa de la Responsable Civil Directa, la Compañía OCASO, presentado en fecha 20 de enero de 2016, teniendo entrada la causa en el Juzgado Decano de Alicante en fecha 13 de abril de 2016 no siendo hasta el día 2 de octubre de 2018 (folio 4, Tomo III), cuando por la Unidad de Apoyo se dicta Auto de admisión de pruebas, por lo que cabe apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, del artículo 21.6 del Código Penal, que de conformidad con la aplicación del artículo 66 del mismo cuerpo legal, exige aplicar la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito, cuando concurra sólo una circunstancia atenuante como muy cualificada.

DÉCIMOPRIMERO.- Por lo tanto, procede la condena del acusado V.M.C.P. como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave del art. 142.2 del Código Penal (reforma operada por la Ley 1/2015), y dentro de la horquilla punitiva (3 a 18 meses), no se puede obviar que la imprudencia que se ha valorado, como menos grave, muy alejada de la grave, obliga a acudir a la mitad inferior, en base a la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, y dentro de ella en prácticamente la mitad de su extensión, que se cifra en CINCO MESES DE MULTA, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, que atendiendo a las circunstancias del caso, ampliamente analizadas en los fundamentos ulteriores y a las personales del acusado carente de antecedentes penales, se entiende proporcionada la pena.

En cuanto a la cuota diaria, se considera adecuada la cuota de SEIS EUROS/DIA igualmente solicitada por el Ministerio Fiscal, sin que existan razones para imponer una cantidad mayor a la vista de las circunstancias del caso, con la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago del artículo 53 del Código Penal.

Por último, no procede la accesoria interesada por la acusación particular, de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo de la condena, al no cumplirse los requisitos del artículo 56.1.3º del Código Penal, al no imponerse al acusado la pena de prisión.

DECIMOSEGUNDO.- En cuanto a la RESPONSABILIDAD CIVIL, el fallecido XXXXXXXXXXXXXXXX, a la fecha del accidente (19 de mayo de 2012), tenía 24 años de edad, soltero, y vivía junto a sus padres D. XXXXXXXXXXXXXXXX y Doña XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX; tales extremos, resultan de la documental aportada (folios 37 a 40 del Tomo I, escritura de personación) hecho no controvertido por las defensas.

El baremo circulatorio no es vinculante, pudiéndose tomar en consideración otros criterios valorativos, si bien la jurisprudencia de forma reiterada ha reconocido la utilidad del baremo, como criterio orientativo que aporta seguridad jurídica de igualdad de trato, para la cuantificación de los perjuicios derivados de conductas dolosas o imprudentes, ajenas al ámbito automovilístico, habiendo llegado afirmarse, con todo acierto, que existiendo semejante instrumento incorporado a nuestro sistema legal indemnizatorio, habrá de exigirse precisamente a la exclusión de los criterios baremados una adecuada justificación del por qué de ese tratamiento; y tomar como punto de referencia en busca de una mayor objetividad de la ponderación, algunos parámetros legales en materia de evaluación de daños personales, que es una actitud jurisdiccional legítima (STS 2200/02 de 27-12). Se plantea si debe resultar de aplicación la Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2012 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, disposición vigente en el momento de los hechos, o por el contrario deben ser otras las cuantías a reconocer a los perjudicados.

Las especiales circunstancias del caso aconsejan tener el baremo únicamente como orientativo, debiéndose tener en cuenta otros factores tales como la difícil valoración del precio del dolor de una muerte tan súbita, en tales circunstancias sociales (la

celebración de una festividad de larga tradición) y la proyección pública que ha tenido el evento, que ha condicionado que la fiesta desde 2012 no haya vuelto a celebrarse por el impacto que tuvo en la localidad de Planes. En tal sentido se ha pronunciado la STS, 26/10, de 25 de enero, en la que se recoge que la indemnización ha de modularse cuando nos encontramos ante un hecho en el que, dadas las circunstancias especialmente dramáticas en que se inscribe, el daño moral sufrido por los perjudicados tiene un componente de gravedad mayor que el derivado por ese mismo resultado producido en el curso de la circulación rodada.

Sin embargo, no puede tener favorable acogida el argumento sostenido por la defensa letrada de la acusación particular, a efectos de la cuantificación de la indemnización, el particular duelo que se alega están sufriendo los padres de XXXXXXXXXXXXXXXX, no ajeno a todos los presentes en el Juicio Oral, constatándose que los mismos siguen exteriorizando de forma muy amarga las condiciones trágicas de la muerte de su hijo, porque no han asumido hasta la fecha la forma de llevar el duelo. No obstante, tener esta circunstancia en cuenta a efectos indemnizatorios sería tanto como decir, de forma injusta, que los padres de XXXXXXXXXXXXXXXX han sufrido la muerte de su hijo más que cualesquiera otros, que puedan verse en la misma circunstancia de perder a un hijo de forma inesperada.

Por ello, sorprende sobremanera, como la acusación en su escrito de conclusiones provisionales (folio 214, Tomo II), presentado en fecha 9 de febrero de 2015, interesara idéntica indemnización a la solicitada por el Ministerio Fiscal (folio 198, Tomo II), a favor de XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, padres de XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX quien no estaba casado ni tenía hijos y convivía con los mismos en las siguientes cantidades: 157.899, 98 € por la defunción; y 8.920, 52 € por los gastos de enterramiento, servicios funerarios y lápida, más los intereses moratorios desde la fecha de los hechos por lo que respecta a la Cía aseguradora OCASO; y de forma inesperada en fase de conclusiones definitivas, la defensa de la acusación solicitó el pago de indemnización en base al baremo de circulación del año 2016, haciendo para ello alusión a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21.12.2015 (que alude a la no vinculación del juzgador a las indemnizaciones recogidas en el baremo, debiendo estar a las circunstancias del caso), argumentándose que en este

caso se trataba de un joven de 24 años, que convivía con sus padres (hecho no controvertido e igualmente acreditado con los documentos Nº 2 y 3 aportados al acto de la vista), a quienes les ha superado la situación, porque están en tratamiento psicológico como consecuencia del fallecimiento de su hijo, lo que acreditan con los documentos Nº 5 y 6 aportados en el Juicio Oral consistente en informe impreso el 31 de mayo de 2018, por el servicio de medicina familiar en los que se consigna respecto de los padres de XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), como motivo de consulta seguimiento de ansiedad, y como amnesis: *“el paciente presenta síntomas de ansiedad en tratamiento con ansiolíticos tras pérdida traumática de su hijo en el 2012”*, siendo el diagnóstico que se consigna de forma idéntica en ambos informes *“ANSIEDAD”*; y respecto a los gastos se acreditan con la documental acompañada al plenario por la que se justifica que los gastos de lápida se incrementaron respecto a la cantidad inicialmente solicitada, acompañándose en el Juicio Oral como DOC. Nº 4, factura Nº 2/19 de fecha 4 de enero de 2019, por la empresa Lápidas Personalizadas, por importe total de 5.080 euros.

El baremo de tráfico, vigente en el momento del accidente, por Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2012, BOE Nº 31 de 6 de febrero de 2012, en el Grupo IV, fija la indemnización por víctima sin cónyuge, ni hijos y con ascendientes con padres convivientes con la víctima en 102.170,58 €, siendo que la cantidad solicitada por el Ministerio Fiscal resulta incrementada en la mitad de tal cuantía (157.899, 98 €), lo que me parece adecuado y acorde con las circunstancias del caso, produciendo a esta juzgadora desazón que en el plenario la acusación duplicara la solicitud de indemnización, cifrándola en 305.400 €, frente a los 157.899,98 € solicitados en su escrito de calificación provisional de fecha 9 de febrero de 2015, basado en el especial dolor que sufren los padres desde el fallecimiento de su hijo. Por ello, procede acordar la indemnización interesada por el Ministerio Fiscal, y por la propia acusación particular en su escrito de acusación provisional, en la cuantía de 157.899, 98 € por la defunción.

Dicha cantidad se verá incrementada en los gastos de enterramiento, servicios

funerarios y lápida, y si bien la acusación solicitó distinta cuantía a la interesada en el escrito de acusación provisional, y la nueva factura aportada en el plenario data del año 2019, no se pone en duda, como no lo hiciera en el juicio ninguna de las defensas, que el coste final de tales gastos ascendió finalmente a la cantidad total en conceptos de enterramiento, servicios funerarios y lápida de 9.160, 52 € (folios 216, 217, del Tomo II y factura de aportada como Doc. nº 4 al acto de Juicio Oral), cantidades de las que responderá personalmente el acusado V.M.C.P..

En cuanto a la Responsabilidad Civil Directa de la aseguradora OCASO, cuya póliza consta a los folios 121 a 152 del Tomo II, contratada por el Ayuntamiento de Planes a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, contempla expresamente la cobertura objeto de este proceso, como es de ver en las condiciones particulares, obrante al folio 132 y 133 donde se recogen expresamente entre las coberturas objeto de seguro: *“...7. La celebración de ferias y mercados, así como concursos, festejos, ceremonias, exposiciones y demás manifestaciones habituales organizadas directamente por el asegurado”,* añadiéndose en las condiciones generales de la póliza (folio 145), que el objeto del seguro que: *“...El asegurador toma a su cargo la responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse para el asegurado, de acuerdo con los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, como consecuencia de los daños y perjuicios causados involuntariamente a terceros por hechos que deriven del riesgo especificado en las Condiciones Particulares de la presente póliza. ARTICULO SEGUNDO. PRESTACIONES DEL ASEGURADOR...correrán por cuenta del asegurador: 2.1. Pago de Indemnizaciones. El Abono a los perjudicados o sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera lugar la Responsabilidad Civil del asegurado...”*.

OCASO alega la falta de cobertura de este siniestro, lo que fundamenta en el contenido de los folios 130 a 138 del Tomo II, bajo el burdo argumento que el seguro de Responsabilidad Civil suscrito en aquél momento, cubre la celebración de festividades organizadas por el Ayuntamiento, pero entiende que en este caso la celebración se organizó por los vecinos. Se olvida igualmente OCASO que el perjudicado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fue indemnizado por la misma aseguradora, a su plena satisfacción, en virtud de la vigencia y cobertura de la misma póliza y por los mismos hechos, por lo que huelga ahondar en la fundamentación de la responsabilidad civil directa de la aseguradora OCASO.

Igualmente procede condenar al Ayuntamiento de Planes como Responsable Civil Subsidiario, por cuanto la condena del acusado deriva del ejercicio del cargo público ostentado en el mismo, como concejal de fiestas de la localidad (hecho no controvertido por las defensas para el caso de condena).

En cuanto a los intereses, se solicita por la acusación particular y el Ministerio Fiscal el interés para la aseguradora del 20% del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro que dispone que: *“4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.*

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100”, solicitándose desde el día 19 de mayo de 2012 hasta la fecha de la consignación judicial, que tuvo lugar el 20.1.2016 (folio 372 del Tomo II), ingresándose la cantidad de 121.308,15 €, correspondientes a indemnización por el fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX y GASTOS FUNERARIOS. Y la aseguradora OCASO desglosa la cantidad consignada en 112.387,63 € en la indemnización por el fallecimiento, (baremo de 2012), y 8.920, 52 € por los gastos de lápida acreditados con el presupuesto obrante a los folios 216 a 219 del Tomo II, (según escrito presentado en fecha 8 de marzo de 2016 (folio 382).

La solicitud de condena al pago de los intereses del artículo 20.4 debe tener favorable acogida, no siendo de aplicación lo establecido en el apartado 8 del artículo 20 alegado

en fase de informe por la aseguradora OCASO, por cuanto a la fecha del siniestro tenía cubierta la Responsabilidad Civil de este siniestro, siéndole comunicado el accidente a OCASO dos días después del accidente, esto es el 21 de mayo de 2012 (folio 124 del Tomo II), siendo por tanto imputable a la aseguradora la consignación de dicha cantidad al estar fundada en una causa justificada; y pese haberse acordado por auto de fecha 4 de junio de 2015, decretar las medidas necesarias para el aseguramiento de las posibles responsabilidades en la presente causa sobre los bienes, entre otros, de OCASO (folios 251 y 252), por importe de 240.257, 73 €, auto notificado a la representación de OCASO en fecha 1 de julio de 2015, a las 13:09 horas (folio 255 del Tomo II), no es hasta el día 20 de enero de 2016 cuando se procede a la consignación judicial de las cantidades anteriormente mencionadas, razones todas ellas por las que procede la condena de OCASO al pago de los intereses del artículo 20.4 de la Ley de contrato de seguro, consistente en el interés legal del dinero, incrementado en un 50% durante los dos primeros años, fecha desde la que se aplicará el interés del 20% hasta la fecha de consignación judicial en que devengará el interés previsto en el artículo 576 de la LEC.

De esta forma considero más que cubiertas las responsabilidades civiles derivadas del accidente con resultado de muerte de XXXXXXXXXXXXXXXX, a favor de sus progenitores con los que convivía, pues si bien resulta difícil traducir el dolor de un hijo en cuantías económicas, una cantidad mayor entiendo no supondría restar el inimaginable dolor que debe suponer la pérdida de un hijo.

En consecuencia, procede condenar al acusado V.M.C.P., solidariamente con OCASO como Responsable Civil Directa y al AYUNTAMIENTO DE PLANES, como Responsable Civil Subsidiario, al pago de la indemnización a favor de XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX en la cantidad de 157.899, 98 € por la defunción, más la cantidad de 9.160, 52 € en concepto de enterramiento, servicios funerarios y lápida, dichas cantidades se verán incrementadas en el interés legal previsto en el artículo 576 de la LEC, y respecto a la responsable Civil Directa OCASO, dicho interés consistirá en virtud del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro, en el interés legal del dinero, incrementado en un 50% durante los dos primeros años (desde el 19 de mayo de 2012 al 18 de mayo de 2014), fecha desde la que se aplicará el interés del 20% hasta la fecha de consignación judicial 20.1.2016, en que devengará el interés previsto en el artículo

576 de la LEC, sin que deba aplicarse el interés del 20% sobre la cantidad no consignada, que se depositó en base a los gastos de enterramiento, servicios y lápidas acreditados hasta ese momento, consignándose igualmente las cuantías indemnizatorias conforme al baremo vigente en el momento de los hechos.

DECIMOTERCERO.-Se imponen al acusado V.M.C.P. $\frac{1}{4}$ de las costas procesales de acuerdo a lo establecido en los arts. 123 CPn y 240 LECrim, incluidas las de la acusación particular pues en esta materia, tal y como recuerda la SAP de Madrid nº 77/2013 de 15-2 *"La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 135/2011 de 15 marzo resume que "la doctrina de la Sala en relación a la imposición de las costas de la acusación particular recogida, entre otras, en SSTs 833/2009 de 28.7, 335/2006 de 24.3, 1510/2004 de 21.11, 1731/2001 de 9.12, que recuerda, que las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquél fueran manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal o a las recogidas en sentencia, relegándose a un segundo plano el antiguo criterio de la relevancia."*

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo **CONDENAR y CONDENO** a **V.M.C.P.** como autor penalmente responsable de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE del artículo su 142.2 CP (según redacción dada por LO 1/2015) a la pena de CINCO MESES de MULTA con CUOTA diaria de SEIS EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP (de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfechas).

Asimismo, y en concepto de Responsabilidad Civil, el acusado **V.M.C.P.** indemnizará de forma conjunta y solidaria con la entidad **OCASO SEGUROS** como **Responsable Civil Directa**, con la **Responsabilidad Civil Subsidiaria** del **AYUNTAMIENTO DE PLANES**, a **XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX** en la cantidad de **157.899, 98 € en concepto de indemnización por la defunción de XXXXXXXXXXXXXXXX**, más la cantidad de **9.160, 52 €**

en concepto de enterramiento, servicios funerarios y lápida. Dichas cantidades se verán incrementadas en el interés legal previsto en el artículo 576 de la LEC, consistiendo el interés respecto a la Responsable Civil Directa OCASO, en el previsto en el artículo 20.4 LCS, del interés legal del dinero, incrementado en un 50% durante los dos primeros años (desde el 19 de mayo de 2012 al 18 de mayo de 2014), fecha desde la que se aplicará el interés del 20% hasta la fecha de consignación judicial 20.1.2016, en que devengará el interés previsto en el artículo 576 de la LEC.

Que debo **ABSOLVER y ABSUELVO a F.J.S.M.** del delito de homicidio por imprudencia del que venía siendo acusado por el fallecimiento de XXXXXXXXXXXXXXXX, con todos los pronunciamientos favorables.

Debo **ABSOLVER Y ABSUELVO a F.J.S.M. y a V.M.C.P.,** del delito de lesiones por imprudencia sufridas por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Lo anterior con expresa imposición al acusado **V.M.C.P.** 1/4 parte de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

Líbrese certificación de esta Sentencia para unirla a los autos de su razón, y notifíquese al Ministerio Fiscal, acusados y partes haciéndoles saber que cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de 10 días.

Así por esta mi Sentencia, cuyo original será llevado al Libro de Sentencias y cuyo testimonio será unido a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Juez que la suscribe en audiencia pública y en el día de la fecha. Doy fe.